



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/1986/4/Add.6
27 enero 1986

ORIGINAL: ESPAÑOL

Primer período ordinario de sesiones de 1986

APLICACION DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Segundos informes periódicos presentados por los Estados partes en el Pacto relativos a los derechos comprendidos en los artículos 10 a 12, de conformidad con la segunda etapa del programa establecido por el Consejo Económico y Social en su resolución 1988 (LX)

Adición

ESPAÑA

[30 de octubre de 1985]

* El informe inicial presentado por el Gobierno de España relativo a los derechos comprendidos en los artículos 10 a 12 del Pacto (E/1980/6/Add.28) fue examinado por el Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales del período de sesiones en su período de sesiones de 1982 (véase el documento E/1982/WG.1/SR.7).

INDICE

	<u>Página</u>
I. ARTICULO 10. PROTECCION DE LA FAMILIA, DE LAS MADRES Y DE LOS NIÑOS	3
A. Protección de la familia	3
B. Protección a la maternidad	6
C. Protección de los niños y de los adolescentes	9
II. ARTICULO 11. DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO	17
A. Medidas generales y concretas adoptadas para asegurar un nivel de vida adecuado y mejorar continuamente las condiciones de existencia de la población	17
B. Derecho a una alimentación adecuada	17
C. Derecho a disponer de ropa adecuada	37
D. Derecho a la vivienda	37
III. ARTICULO 12. DERECHO A LA SALUD FISICA Y MENTAL	51
Principales leyes, reglamentos administrativos, acuerdos colectivos y otros tipos de medidas destinados a defender y promover el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y decisiones de los tribunales pertinentes	51

Anexos

I. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS Y A LAS OBSERVACIONES HECHAS EN EL GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES DEL PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DURANTE EL EXAMEN DEL INFORME INICIAL	57
II. LISTA DE MATERIALES DE REFERENCIA	61

/...

I. ARTICULO 10. PROTECCION DE LA FAMILIA, DE LAS
MADRES Y DE LOS NIÑOS

A. Protección de la familia

1. Principales leyes, reglamentos administrativos y acuerdos colectivos destinados a promover la protección de la familia, decisiones pertinentes de los tribunales, si las hubiere

1. La protección de la familia constituye uno de los principios rectores de la política social-económica del Estado y así se declara en el capítulo 3, Título I de la Constitución, a cuyo tenor el artículo 39 dice:

a) Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia;

b) Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad;

c) Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos, dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda;

d) Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

2. Por otra parte, la misma Constitución en el capítulo 2, Título I, artículo 32, establece:

a) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica;

b) La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

2. Garantías del derecho de hombres y mujeres de contraer matrimonio con su pleno y libre consentimiento y para constituir una familia; medidas adoptadas para abolir las costumbres, leyes y prácticas anticuadas que puedan afectar la libertad de elección de un cónyuge

3. Las normas constitucionales recogen principios de protección a la familia profundamente arraigados en el derecho español y cuya ordenación aparece fundamentalmente en el Código Civil que dedica la mayor parte de su Libro 1º a la ordenación del matrimonio, a las relaciones de paternidad y filiación, a la obligación de alimentos entre parientes y a la tutela, que se complementan con unas normas relativas a las donaciones sucesivas, con la misma finalidad de proteger los derechos de los hijos. Esta legislación tradicional ha sido objeto

/...

de profundas modificaciones para adaptarlas a los mandatos constitucionales que - por afectar derechos fundamentales - han de ser interpretados, según el artículo 10.2 de la Constitución, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias, ratificados por España.

4. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se eleva pues al rango de norma de interpretación de la Constitución, respecto a los derechos que reconoce. Como consecuencia, en los últimos cuatro años, se han llevado a cabo importantes reformas del Código Civil, encaminadas a hacer efectiva la igualdad de derechos entre los cónyuges, entre sí, y de los padres ante los hijos.

5. Concretamente han sido modificados los artículos 66 y 71 del Código Civil, por la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio (véase anexo II). En la actualidad, los esposos son iguales en derechos y en deberes; el domicilio conyugal se fijará de común acuerdo, y ni el marido, ni la mujer, pueden atribuirse la representación del otro cónyuge, sin que le haya sido especialmente conferida.

6. Con esta ley se ha restablecido el divorcio en nuestro país, en un marco muy semejante al de la mayoría de los países europeos, y se ha reconocido validez a las sentencias de divorcio extranjeras, si reúnen los requisitos exigidos por el Código Procesal Español.

7. El pleno consentimiento de los contrayentes del matrimonio viene exigido también en el Código Civil, determinándose que ha de ser libre, concorde y observando alguna de las formas de celebración de matrimonio reconocidas por la ley (arts. 49 a 60 del Código Civil, reformado por la ley citada).

8. El derecho a la igualdad de los esposos durante el matrimonio y en caso de disolución, ha sido igualmente regulado en la reforma citada. En esta misma línea, la Ley 11/1981, de 13 de mayo, que modifica el Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, la Ley 51/1982, de 13 de julio, que modifica los artículos 17 a 26 del Código Civil en materia de nacionalidad y la Ley 13/1983, de 24 de octubre, que modifica el Código Civil en materia de tutela, establecen, en toda su extensión, el principio de igualdad jurídica entre los esposos entre sí y entre el padre y la madre, en estas materias (véase anexo II).

9. La Ley 11/1981, de 13 de mayo citada, reconoce la posibilidad de investigación de la paternidad y la maternidad, mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas (art. 127 del Código Civil) con la finalidad de velar por el derecho del niño a conocer sus orígenes (véase anexo II). En cuanto al derecho a la inscripción y al nombre, la Ley del Registro Civil establece los requisitos para ello.

10. España se ha adherido, el 27 de enero de 1984, al Convenio No. 6 de la Comisión Internacional del Estado Civil, relativo a la determinación de la filiación materna de hijos no matrimoniales (véase anexo II).

/...

11. Por Real Decreto 1322/1981, de 3 de julio, se crearon los juzgados de familia, con la misión de conocer de forma exclusiva las actuaciones judiciales referentes al derecho de familia (títulos IV y VII del Código Civil). De acuerdo con los últimos datos disponibles, correspondientes al año 1983, existían en nuestro país 26 juzgados de familia (Baleares, 1; Barcelona, 4; Córdoba, 1; La Coruña, 1; Guipuzcoa, 1; Granada, 1; Madrid, 4; Málaga, 1; Murcia, 1; Navarra, 1; Las Palmas, 1; Sevilla, 2; Valencia, 2; Valladolid, 1; Vizcaya, 2 y Zaragoza, 2).

12. En lo que se refiere a los matrimonios, el rasgo más sobresaliente en la evolución de la nupcialidad española ha sido la caída acentuada que se observa desde 1975 y que se ha traducido en la pérdida de más de un punto y medio por mil en la tasa anual de nupcialidades durante el período 1974-1984 (véanse cuadros 4 y 5). El valor de esta tasa en 1982, inferior al 5 por mil, debe interpretarse con precaución, a causa de la subestimación de los matrimonios registrados que se ha observado tras la implantación en 1980 del nuevo sistema de declaración al Registro Civil.

13. Por su parte, la suma de primeros matrimonios reducidos ha disminuido en un 17% desde 1974 a 1979 (teniendo en cuenta la subestimación arriba indicada). El nivel alcanzado en este último año que implicaría en régimen estacionario el celibato definitivo del 98 por mil de los hombres y del 153 por mil de las mujeres es todavía elevado, respecto a las pautas europeas, sin embargo la evolución señalada prueba que la sociedad española no es ajena a la desafección frente al matrimonio, aunque sea más acentuada y persistente en otros países occidentales (véase cuadro 5).

14. En lo que se refiere a las demandas de divorcio, no se han cumplido las primeras previsiones sobre el número de éstas que han alcanzado niveles más bajos que los que se habían calculado. En el año 1982, se concedieron 5.810 separaciones por mutuo acuerdo; 11.626 separaciones por causa legal; 8.418 divorcios por mutuo acuerdo; 13.045 divorcios sin mutuo acuerdo y 81 anulaciones. En 1983, 6.951 separaciones por mutuo acuerdo; 12.700 separaciones por causa legal; 7.540 divorcios por mutuo acuerdo; 11.766 divorcios sin mutuo acuerdo y 36 anulaciones.

3. Medidas para facilitar la constitución de una familia, tales como subsidios o subvenciones de instalación, provisión de vivienda y otros beneficios

15. (No se han experimentado variaciones sustanciales, respecto del informe anterior).

4. Medidas destinadas a mantener, fortalecer y proteger a la familia tales como subsidios familiares, exención de impuestos a instituciones para el cuidado de los niños

16. las instituciones para el cuidado de los niños, independientemente de las de carácter privado y de las organizadas por entidades regionales y locales, han estado vinculadas, a nivel de la administración central, a varios Departamentos Ministeriales (Educación y Ciencia, Trabajo y Seguridad Social, Cultura y Justicia). En el período que comprende el presente informe, se ha llevado a cabo el proceso de estas instituciones a las comunidades autónomas que aún no ha finalizado.

/...

17. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde el año 1974 y a través de los sucesivos planes de inversiones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, ha destinado cantidades para financiar la creación y mantenimiento de las guarderías infantiles laborales, reguladas por Orden Ministerial de 12 de febrero de 1974.

18. Durante el quinquenio 1979-1983, las cantidades destinadas para la construcción y mantenimiento de las guarderías infantiles laborales experimentó un incremento global de un 35,1%, el número de guarderías un 73,5%, y el número de niños acogidos a estas instituciones un 44,2%. Las cifras correspondientes al año 1983 son las siguientes: Ptas 1.527.394.000 para subvenciones; número de guarderías 793; y 83.968 niños acogidos a las mismas.

19. Por su parte, el Ministerio del Interior ha dedicado una especial atención a las funciones policiales de prevención e investigación de hechos que puedan constituir malos tratos de obra o de palabra, a las esposas por parte de sus maridos, con el fin no sólo de proteger los derechos de la mujer, sino también con la finalidad de contribuir a la estabilidad y equilibrio de la unidad familiar.

20. Dentro de las medidas de protección a la familia, no deben olvidarse las importantes ayudas que el Instituto Nacional de Servicios Sociales, a través de los Presupuestos de la Seguridad Social, y la Dirección General de Acción Social y otros organismos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, prestan a los minusválidos (asistencia sanitaria, subsidio de garantía de ingresos mínimos, rehabilitación medico-funcional, etc.), a la tercera edad (residencias, centros de día, ayuda a domicilio, etc) y a otros colectivos necesitados (infancia y adolescencia marginada, principalmente), y que no se examinan en detalle por rebasar los límites del presente informe.

B. Protección a la maternidad

Protección y asistencia especiales concedidas a las madres que trabajen incluidas las licencias con remuneración o con prestación de la seguridad social y garantías contra el despido durante un plazo razonable antes y después del parto

21. Respecto a los permisos por maternidad, la legislación prevé una suspensión de la relación laboral por esta causa de 14 semanas, distribuidas a opción de la interesada (art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de marzo, Boletín Oficial del Estado de 14 de marzo de 1980). Esta misma norma establece que esta suspensión de la relación laboral, lo será con reserva de puesto de trabajo.

22. A efectos económicos, la situación de maternidad es equiparable a la incapacidad laboral transitoria, siendo por ello idénticas las prestaciones a cargo de la seguridad social, consistiendo en un subsidio, cuya cuantía es del 75% de la base de cotización, aunque en la mayoría de los convenios colectivos se pactan condiciones más favorables, llegando en muchos casos a la percepción del sueldo íntegro por la madre trabajadora (art. 127 de la L.S.S. texto refundido de la

/...

Ley General de la seguridad social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo; art. 2.1. Reglamento General de Prestaciones, aprobado por Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, modificado por Real Decreto 53/1980, de 11 de enero; y Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, modificado parcialmente por el 3091/1972, de 2 de noviembre, sobre prestaciones y ordenación de servicios médicos de la asistencia sanitaria de la seguridad social).

23. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tienen derecho a una hora de ausencia del trabajo, que pueden dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en media hora, con la misma finalidad (art. 37.4 del Estatuto de los Trabajadores).

24. El trabajador que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o a un disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquella (art. 37.5 del Estatuto de los Trabajadores).

25. Independientemente de lo anterior, los trabajadores tienen derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha de nacimiento de éste (art. 46.3 del Estatuto de los Trabajadores).

26. Estas excedencias han sido contempladas, en el Estatuto de los Trabajadores, con visión renovadora de las necesidades familiares en la sociedad actual, transformando la excedencia voluntaria por nacimiento de hijos que en la legislación anterior se concedía exclusivamente a la trabajadora, en un derecho de todos los trabajadores, sin distinción de sexo. Dicha excedencia, no superior a tres años, para atender el cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha del nacimiento de éste, pueden disfrutarla indistintamente el padre o la madre, aunque cuando ambos trabajen, sólo uno de ellos puede ejercitar este derecho.

27. No se dispone de datos estadísticos sobre el número de hombres que han disfrutado de estos permisos, aunque en realidad y por circunstancias varias (mayores ingresos por parte del marido, posturas tradicionales en el reparto de tareas entre los cónyuges dentro del ámbito familiar, etc.) son las mujeres las que suelen solicitarlos para poder atender a sus hijos pequeños.

28. Por tratarse de una excedencia voluntaria, regulada en el apartado 3 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, las trabajadoras o trabajadores que la soliciten conservan solo un derecho referente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya, que hubiera o se produjera en la empresa, circunstancia que en la actualidad de crisis económica dificulta una reincorporación garantizada a corto plazo.

29. No obstante, existen expectativas de que esta situación pueda mejorar en el futuro, ya que, como un primer paso y por la vía de los convenios colectivos, se está regulando el derecho a la incorporación automática, en algunos de estos convenios.

/...

30. Como protección específica de la maternidad de la mujer trabajadora, cabe hacer mención al Convenio No. 136 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España el 31 de mayo de 1973 (entregada en vigor el 8 de mayo de 1974, Boletín Oficial del Estado de 5 de febrero de 1975) relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno, que prohíbe a las mujeres embarazadas y lactantes los trabajos "que entrañen exposición al benceno", y a la ley de energía nuclear 25/1964, de 28 de abril, cuyas normas se incorporaron a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene de 9 de marzo de 1971, según la cual "se prohíbe ... a las mujeres menores de 21 años, a las casadas en edad de procrear y a las solteras tres meses antes de contraer matrimonio, realizar trabajos expuestos a radiaciones en dosis superiores a 1,5 rems al año".

31. Por otro lado, el Real Decreto de 11 de abril de 1980 (Boletín Oficial del Estado de 23 de abril de 1980), tenía por objeto establecer medidas conducentes a promover el empleo de la mujer con responsabilidades familiares, a cuyos efectos se establecieron los siguientes programas:

- a) Programa de Formación Profesional;
- b) Programa de Promoción de Cooperativas de Trabajo asociado, cuya finalidad sea la realización de aquellos servicios que la mujer necesita como consecuencia de su incorporación al trabajo, especialmente guarderías infantiles;
- c) Programa de Promoción del Trabajo Autónomo de la Mujer con cargas Familiares.

32. Dicho Real Decreto fue derogado por el 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulaban diversas medidas de fomento del empleo, en el que en la sección tercera del capítulo III se incluía un programa en favor de las mujeres con responsabilidades familiares, muy similar al anterior, compuesto por actividades de formación profesional, con carácter preferente y gratuito para aquellas mujeres que buscaban empleo, precisaran de una reconversión en su actividad profesional o quisieran acceder a un puesto de trabajo de mayor cualificación dentro de su empresa; actividades de promoción de cooperativas de trabajo asociado, cuya finalidad fuese la realización de servicios necesarios para su incorporación al trabajo, especialmente guarderías infantiles, y actividades para la promoción del trabajo autónomo de la mujer con cargas familiares. Este programa fue derogado por el Real Decreto 1992/1984, de 31 de octubre.

33. Estos programas han tenido poca relevancia, en el conjunto de las actividades del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, como lo demuestra que el importe medio de los préstamos concedidos en el período 1980-1984 ha sido aproximadamente de Ptas 65 millones, lo que ha supuesto poco más del 1% del total de los préstamos concedidos por dicho organismo. El resto de las actividades y ayudas han tenido una incidencia menor.

34. Finalmente, la Orden de 21 de febrero de 1985, por la que se establecen los programas de acciones a financiar con cargo al Fondo de Solidaridad para el Empleo, constituido en la disposición adicional decimonovena de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1985, en su sección cuarta, sobre acciones de reinserción e integración socioprofesional en favor de personas

/...

con especiales dificultades en el mercado de trabajo, incluye, en este colectivo, a las mujeres desempleadas, con responsabilidades familiares, que lleven inscritas como demandantes de empleo, en la correspondiente oficina más de un año, considerando mujer con responsabilidades familiares aquella que tuviera a su cargo cónyuge, descendiente, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive.

35. Los beneficios, consistentes en subvenciones para sufragar los gastos de formación o de reconversión profesional y en subvenciones del 15% del sueldo, incluidas las cotizaciones sociales, por un año de contrato, son abonadas a las empresas, cualesquiera que sea la forma jurídica que adopten, siempre que contraten personas con especiales dificultades en el mercado de trabajo, entre las que se encuentran, además de las mujeres con responsabilidades familiares, los trabajadores desempleados que lleven inscritos como demandantes de empleo en la correspondiente oficina más de 18 meses, los minusválidos inscritos como desempleados y los emigrantes retornados que perciban o hayan agotado la prestación o subsidio por desempleo.

C. Protección de los niños y de los adolescentes

1. Disposiciones relativas al trabajo de los niños y de los adolescentes, incluida la edad mínima para el empleo remunerado o no remunerado, la reglamentación de las horas de trabajo y descanso, la prohibición o la restricción del trabajo nocturno y las penas impuestas por la violación de estas disposiciones

36. La protección del niño viene reconocida en la Constitución (art. 39,4), precisamente mediante una remisión a los acuerdos internacionales que velan por los derechos del niño. La legislación que se ha citado en el apartado A), en materia de filiación, patria potestad, nacionalidad y tutela, se dirige precisamente a la protección jurídica del niño, frente a discriminaciones por razón de su origen, matrimonial o no matrimonial, y para asegurar su asistencia, bien en el ámbito familiar, bien a través de la institución de la tutela.

37. En el sistema educativo de nuestro país la edad de terminación de la enseñanza obligatoria (EGB) es la de los 14 años. En lo que se refiere a la de admisión al trabajo, España ha ratificado el Convenio No. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo de la OIT, en el que se fija dicha edad a los 16 años, precepto que se ha recogido en el artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores, prohibiéndose la admisión al trabajo a los menores de 16 años.

38. Para coordinar las normas educativas con las laborales, se hace necesario que se contemple en nuestra legislación la conveniencia de prolongar la escolaridad obligatoria hasta los 16 años; y en este sentido hay que señalar que el artículo 89.7 de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa establece que: "las empresas exigirán a sus trabajadores al admitirles, la posesión de alguno de los grados de Formación Profesional en las condiciones que reglamentariamente se determinen y permitirán a su personal en servicio acudir a los cursos de perfeccionamiento, habilitación y actualización que organicen los Centros Docentes", mandato que aún no ha sido reglamentariamente desarrollado.

/...

39. Este desajuste entre las normas educativas y las laborales y otras circunstancias, de índole diversa, agravadas por la crisis económica, dificultan la aplicación rigurosa de la prohibición del acceso al trabajo de los menores de 16 años. Según cifras de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística el número de ocupados, en el año 1984, de 14 y 15 años ascendió aproximadamente a 40.000 personas.

40. Los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar trabajos nocturnos (art. 2 del Estatuto de los Trabajadores). Está prohibido igualmente realizar horas extraordinarias a los menores de 18 años (art. 6.3 del Estatuto de los Trabajadores).

41. En lo que se refiere al empleo de jóvenes, en cumplimiento del artículo 11 y en desarrollo del mismo se han adoptado diversas medidas para fomentar el empleo y la contratación de los jóvenes, intentando facilitar al máximo su incorporación a la vida laboral activa, fundamentalmente, a través de dos modalidades de contratación, utilizándose una u otra dependiendo del nivel de formación profesional de los jóvenes.

Estas dos modalidades son:

a) Los contratos para la formación (art. 11 del Estatuto de los Trabajadores, en la nueva redacción que le da la Ley 32/1984, de 2 de agosto y en su desarrollo al Decreto 1992/1984, de 31 de octubre), están dirigidos a facilitar el inicio de la vida laboral de aquellos jóvenes que tienen una nula o escasa cualificación profesional y tienen entre 16 y 20 años;

b) Los contratos en prácticas están dirigidos a facilitar la iniciación en la vida laboral de los jóvenes al finalizar sus estudios de nivel universitario o equivalente, bachillerato, formación profesional u otros títulos académicos o laborales que habiliten legalmente para la práctica profesional.

2. Medidas adoptadas para evitar el empleo de niños y adolescentes en cualquier trabajo que sea peligroso para la vida, nocivo para su moral o salud o que pueda perjudicar su desarrollo físico y psicosocial normal, y penas impuestas por la violación de esas medidas

42. Dispone el tan citado Estatuto de los Trabajadores, a este respecto, que los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud como su formación profesional y humana (art. 6.2 del Estatuto de los Trabajadores).

43. Igualmente está previsto que la intervención de los menores de 16 años en espectáculos públicos sólo se autorizará en casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga peligro para su salud física ni para su formación profesional y humana (art. 6.4 del Estatuto de los Trabajadores).

44. Además de las normas que contiene el Estatuto de los Trabajadores y que se acaban de citar, hay que hacer mención al Decreto de 26 de julio de 1957 que prohíbe a los menores la realización de una serie de actividades que se contienen

/...

en el propio Decreto, unas con carácter absoluto y otras que se dejan a la apreciación de la Inspección de Trabajo en vista de su penosidad o riesgo en cada caso particular. Las infracciones de estas normas, se sancionarán igualmente que las del apartado anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 del Estatuto de los Trabajadores.

45. En lo que se refiere al Ministerio de Cultura, la Dirección General de Desarrollo Comunitario ha sido sustituida por la Dirección General de Juventud y Promoción Sociocultural, según Reales Decretos 129/1980, de 18 de enero y 442/1981, de 6 de marzo.

46. Las atenciones en materia cultural se han orientado con un carácter general, de modo que incidan en todos los sectores de la población y, por tanto, en la familia, siendo especiales las actuaciones dirigidas a los jóvenes en orden a la promoción del asociacionismo, estímulo y ayuda a las actividades de ocio y tiempo libre, la participación en el desarrollo político, social, económico y cultural, así como en todo aquello que guarda relación con la comunicación, la promoción cultural y la cooperación internacional, esta última en el marco de los Convenios de Cooperación Cultural, suscritos por España con terceros países.

3. Datos estadísticos y de otra índole sobre el número de niños y adolescentes, pertenecientes a los distintos grupos de edad que estén trabajando de hecho, así como sectores y tipo de trabajo en que están empleados

47. Como se ha dicho anteriormente, según cifras de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, el número de ocupados de 14 y 15 años, en el año 1984, ascendió aproximadamente a 40.000.

48. Respecto a los adolescentes, a continuación se adjuntan el cuadro 1: "Población activa juvenil ocupada por sexo y ocupaciones, referida a los cuartos trimestres del período 1982-1984" y el cuadro 2: "Población activa juvenil ocupada por sexo y ramo de actividad", referida al mismo período.

/...

Cuadro 1

Población activa juvenil ocupada por sexo y ocupaciones,
referida a los cuartos trimestres del período 1982-1984

	1982	1983	1984
<u>Ambos sexos</u>			
Total	574,8	519,6	445,9
Profesionales y técnicos	3,4	2,5	5,7
Funcionarios públicos superiores y directores de empresa	-	-	-
Personal administrativo	34,3	30,0	27,0
Comerciantes y vendedores	64,6	54,0	46,1
Trabajadores de los servicios	111,2	113,3	90,9
Agricultores, ganaderos, pescadores y cazadores	123,7	129,6	124,9
Trabajadores no agrarios conductores de máquinas y vehículos de transporte y trabajadores asimilados	237,6	189,3	150,3
Activos que no pueden clasificarse según la ocupación	-	-	-
Fuerzas armadas	0,1	0,9	0,9
<u>Hombres</u>			
Total	339,6	305,9	273,9
Profesionales y técnicos	2,9	1,7	5,2
Funcionarios públicos superiores y directores de empresa	-	-	-
Personal administrativo	12,9	11,6	13,2
Comerciantes y vendedores	27,5	22,6	21,8
Trabajadores de los servicios	28,5	29,2	28,8
Agricultores, ganaderos, pescadores y cazadores	98,4	103,9	101,1
Trabajadores no agrarios conductores de máquinas y vehículos de transporte y trabajadores asimilados	169,3	136,0	102,7
Activos que no pueden clasificarse según la ocupación	-	-	-
Fuerzas armadas	0,1	0,9	0,9
<u>Mujeres</u>			
Total	235,2	213,8	171,9
Profesionales y técnicos	0,4	0,9	0,5
Funcionarios públicos superiores y directores de empresa	-	-	-
Personal administrativo	21,4	18,4	13,8
Comerciantes y vendedores	37,1	31,5	24,3
Trabajadores de los servicios	82,7	84,1	62,0
Agricultores, ganaderos, pescadores y cazadores	25,3	25,7	23,7
Trabajadores no agrarios conductores de máquinas y vehículos de transporte y trabajadores asimilados	68,3	53,3	47,6
Activos que no pueden clasificarse según la ocupación	-	-	-
Fuerzas armadas	-	-	-

/...

Cuadro 2
Población activa juvenil ocupada por sexo y ramo de actividad,
referida a los cuartos trimestres del período 1982-1984

	1982	1983	1984
<u>Ambos sexos</u>			
Total	574,8	519,6	445,9
Agricultura y pesca	126,0	128,5	125,6
Energía y agua	1,9	1,2	1,7
Extracción de minerales no energéticos. Industria química	10,5	8,4	9,7
Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión	27,9	16,7	16,2
Otras industrias manufactureras	112,7	86,4	68,5
Construcción	43,9	43,1	27,3
Comercio. Restaurantes y hostelería. Reparaciones	151,6	132,1	121,6
Transportes y comunicaciones	9,1	6,6	7,2
Finanzas, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres	9,4	9,4	6,7
Otros servicios	81,9	87,1	61,4
No clasificables	-	-	-
<u>Hombres</u>			
Total	339,6	305,9	273,9
Agricultura y pesca	99,5	102,6	100,3
Energía y agua	1,9	1,2	1,7
Extracción de minerales no energéticos. Industria química	7,8	4,8	7,6
Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión	21,9	15,1	13,0
Otras industrias manufactureras	54,8	39,0	28,0
Construcción	42,5	42,3	26,3
Comercio. Restaurantes y hostelería. Reparaciones	92,3	79,8	77,1
Transportes y comunicaciones	6,9	4,4	5,7
Finanzas, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres	4,8	6,0	5,3
Otros servicios	7,3	10,6	9,0
No clasificables	-	-	-
<u>Mujeres</u>			
Total	235,2	213,8	171,9
Agricultura y pesca	26,5	25,9	25,3
Energía y agua	-	-	-
Extracción de minerales no energéticos. Industria química	2,7	3,6	2,1
Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión	6,0	1,6	3,3
Otras industrias manufactureras	57,9	47,5	40,6
Construcción	1,4	0,8	1,0
Comercio. Restaurantes y hostelería. Reparaciones	59,3	52,3	44,5
Transportes y comunicaciones	2,3	2,1	1,5
Finanzas, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres	4,6	3,4	1,3
Otros servicios	74,6	76,5	52,4
No clasificables	-	-	-

/...

Cuadro 3

Estructura de la población, 1971-1981

A. Componentes del crecimiento demográfico

Conceptos	1971-1975		1976-1981	
	Cifras absolutas	Tasas: por 1.000	Cifras absolutas	Tasas: por 1.000
Nacimientos	3 375 401	19,35	3 216 256	16,96
Defunciones	1 494 422	8,57	1 527 070	8,05
Saldo vegetativo	1 880 979	10,79	1 689 186	8,91
Saldo migratorio	-199 102	-1,14	269 761	1,42
Crecimiento total	1 681 877	9,65	1 958 947	10,33

B. Estructura de la población por grandes grupos de edad

Grupos de edad	1970	1975	1981
<u>Cifras absolutas</u>			
Población total	34 041 531	35 723 401	37 682 355
0 - 14 años	9 395 498	9 681 042	9 646 683
15 - 64 años	21 378 051	22 327 126	23 777 566
65 y más	3 267 982	3 715 238	4 258 100
<u>Porcentajes</u>			
Población total	100,0	100,0	100,0
0 - 14 años	27,6	27,1	25,6
15 - 64 años	62,8	62,5	63,1
65 y más	9,6	10,4	11,3

Tasa de crecimiento anual acumulativo (en miles)

	75/71	81/76
Población total	9,7	10,4
0 - 14 años	6,0	-0,7
15 - 64 años	8,7	12,3
65 y más	26,0	26,8

Fuente: España, Instituto Nacional de Estadística.

/...

Cuadro 4

Matrimonios, nacimientos y defunciones, 1974-1984

Años	Matrimonios		Nacimientos		Defunciones		Crecimiento vegetativo por 1.000 habitantes
	En miles	por 1.000 habitantes	En miles	por 1.000 habitantes	En miles	por 1.000 habitantes	
1974	267 171	7,63	685 219	19,56	298 484	8,52	11,04
1975	271 347	7,64	669 378	18,85	298 192	8,40	10,45
1976	260 974	7,26	677 456	18,85	299 007	8,32	10,53
1977	262 015	7,20	656 357	18,05	294 324	8,09	9,95
1978	258 070	7,02	636 892	17,32	296 781	8,07	9,25
1979	246 349	6,64	601 992	16,22	291 213	7,85	8,38
1980 <u>a/</u>	213 363	5,71	56 401	15,13	287 621	7,70	7,43
1981 <u>a/</u>	199 057	5,29	532 455	14,13	286 400	7,60	6,53
1982 <u>a/</u>	188 836	4,98	509 685	13,44	282 250	7,44	6,00
1983 <u>b/</u>			497 995	13,06			
1984 <u>b/</u>			480 634	12,55			

Fuente: España, Instituto Nacional de Estadística.

a/ Cifras provisionales.

b/ Cifras estimadas.

/...

Cuadro 5
Evolución de la nupcialidad

Años	Suma de los primeros matrimonios reducidos		Edad media al contraer el primer matrimonio. Años cumplidos		
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Diferencia
1974	1 058	1 042	26,0	24,3	2,7
1975	1 060	1 037	26,4	23,9	2,5
1976	1 003	0,976	26,2	23,6	2,6
1977	0,982	0,955	26,0	23,5	2,5
1978	0,947	0,920	25,9	23,4	2,5
1979	0,902	0,842	25,9	23,4	2,5

Proporciones de solteros, por sexo y grupos de edad
(Por 100 habitantes)

Grupos de edad	Varones		Mujeres	
	1975	1981	1975	1981
Total	51,17	49,88	45,85	44,24
De 14 años	100,00	99,54	100,00	99,28
De 15 a 19 años	99,00	97,77	95,31	93,92
De 20 a 24 años	85,52	81,35	62,02	58,76
De 25 a 29 años	39,40	36,70	23,37	22,43
De 30 a 34 años	18,44	17,37	12,77	12,53
De 35 a 39 años	12,39	12,28	9,80	9,95
De 40 a 44 años	10,70	10,45	9,61	8,81
De 45 a 49 años	9,42	10,12	10,70	9,07
De 50 a 54 años	7,97	9,31	11,40	10,72
De 55 a 59 años	7,16	8,21	12,72	11,77
De 60 a 64 años	7,12	7,57	13,13	12,66
De 65 y más años	7,13	7,46	13,80	13,98

Fuente: España, Instituto Nacional de Estadística.

/...

II. ARTICULO 11. DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO

A. Medidas generales y concretas adoptadas para asegurar un nivel de vida adecuado y mejorar continuamente las condiciones de existencia de la población

B. Derecho a una alimentación adecuada

1. Principales leyes, reglamentos administrativos y acuerdos colectivos destinados a promover el derecho de toda persona a una alimentación adecuada, y decisiones de los tribunales pertinentes

49. La Constitución de 1978, con un evidente acierto, no quiso dejar fuera de su Título I, relativo a los derechos y deberes fundamentales, una materia tan importante como la defensa del consumidor que no había sido abordada anteriormente con el suficiente rigor. En esta línea fue aprobada la Ley 26/1984 de 19 de julio, denominada Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, para cuya redacción se han contemplado los principios y directrices vigentes en esta materia en la Comunidad Económica Europea. Con la aprobación de esta ley se ha pretendido dotar a los consumidores y usuarios de un instrumento legal de protección y defensa, que no excluye ni suplanta otras actuaciones y desarrollos normativos, derivados de ámbitos competenciales concurrentes, tales como la legislación mercantil, penal o procesal y las normas sobre seguridad industrial, higiene y salud pública, ordenación de la producción y comercio interior.

Los objetivos de esta ley se concretan en tres direcciones:

- a) Establecer sobre bases firmes y directas, los procedimientos eficaces para la defensa de los consumidores y usuarios;
- b) Disponer del marco legal adecuado para favorecer un desarrollo óptimo del movimiento asociativo en este campo;
- c) Declarar los principios, criterios, obligaciones y derechos que configuran la defensa de los consumidores y usuarios que, en el ámbito de sus competencias, habrán de ser tenidos en cuenta por los poderes públicos en las actuaciones y desarrollos normativos futuros en el marco de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (sentencia número 71/1982, de 30 de noviembre, del Tribunal Constitucional, en relación con el Estatuto del Consumidor del País Vasco (Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 1982), y sentencia número 32/1983, de 28 de abril (Boletín de 17 de mayo de 1983), en relación con el Real Decreto 2824/1981, de 27 de noviembre, sobre coordinación y planificación sanitaria, y con el Real Decreto 2824/1981, de la misma fecha, sobre registro sanitario de alimentos).

50. Dentro del Ministerio de Sanidad y Consumo se encuadra la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA) regulada por el Real Decreto 1456/1982, de 18 de junio (Boletín de 2 de julio de 1982), en cuyo seno funcionan numerosos grupos de trabajo dedicados a una intensa labor de colaboración normativa, integrados por funcionarios de todos los departamentos ministeriales afectados.

/...

51. Desde su constitución, la Comisión ha informado un considerable número de disposiciones que han posibilitado alcanzar el 90%, por lo menos, de los objetivos iniciales. Es decir, el desarrollo total del Código Alimentario Español, aprobado por decreto 2519/1974, de 9 de agosto, de acuerdo con lo que se prevé en su artículo 5, es decir la posibilidad de desarrollar lo dispuesto en el mismo, mediante las oportunas normas que permitan la permanente actualización de los requisitos exigibles a los productos comprendidos en su ámbito de aplicación.

52. Entre estas normas complementarias destacan: Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados (Boletín de 30 de agosto de 1982); Real Decreto 2506/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba la norma general para el control del contenido efectivo de los productos alimenticios envasados (Boletín de 20 de septiembre de 1983); Orden de 26 de septiembre de 1983, sobre control y registro sanitarios de determinados productos (Boletín de 5 de octubre de 1983), real Decreto 2814/1983, de 13 de octubre, por el que se prohíbe la utilización de materiales plásticos recuperados o regenerados que hayan de estar en contacto con los alimentos (Boletín de 11 de noviembre de 1983), y Real Decreto 106/1985, de 23 de enero, por el que se modifican las condiciones generales que establece el Código Alimentario Español para los materiales de uso doméstico no en contacto con los alimentos (Boletín de 31 de enero de 1985).

a) Legislación alimentaria

53. Las primeras normas legales de carácter general relacionadas con los alimentos estuvieron contenidas en el Real Decreto de 22 de diciembre de 1908 y están dirigidas a combatir el fraude. Otro Real Decreto de 17 de septiembre de 1920 aprobaba directivas técnicas en las que se definían alimentos, materiales de envase y embalaje, aparatos, utensilios y receptáculos relacionados con los alimentos. Desde estas fechas hasta 1967 las disposiciones oficiales sobre alimentos fueron numerosas, dispersas y en ocasiones incluso contradictorias. Como la legislación se iba incrementando el Gobierno optó por adoptar una política alimentaria que tuviese no solo aspectos sanitarios de lucha contra el fraude sino también los nuevos conocimientos tecnológicos, la necesidad de criterios uniformes, la participación ciudadana en las decisiones, la diversidad de servicios, la información objetiva a los consumidores y la dificultad de establecer responsabilidades para los implicados en el comercio alimentario. En 1966, se creó la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, encargada de redactar el Código Alimentario Español que fue publicado en 1967; así se inició la política de control alimentario y la coordinación de la legislación alimentaria española, sobre una base de criterio uniforme. El Código es una recopilación de principios generales básicos para desarrollar las reglamentaciones técnico-sanitarias donde se recogen las normas específicas para cada actividad del sector alimentario así como criterios de inspección y control.

54. En 1974, por Decreto 2519/74, de 9 de agosto, la Comisión fue reorganizada y se le asignaron las siguientes funciones:

a) Informar, con carácter preceptivo, las disposiciones que se refieran a la aplicación, desarrollo o modificación del Código Alimentario Español;

/...

- b) Mantener actualizada la documentación e información nacional e internacional, en lo referente al sector alimentario;
- c) Estudiar los problemas relacionados con la ordenación alimentaria;
- d) Crear grupos de expertos o de trabajo para estudiar aspectos concretos de aplicación y desarrollo del Código Alimentario Español.

55. La Comisión está formada por representantes de todos los Ministerios de la Federación de Industrias de la Alimentación y de las Asociaciones de Consumidores. Sus funciones han sido ampliadas a la información al consumidor sobre aspectos técnicos, sanitarios y comerciales del control alimentario y al desarrollo del Código Alimentario Español.

56. Además de la legislación nacional, las comunidades autónomas y los municipios pueden desarrollar las disposiciones de carácter nacional para adaptarlas a su territorio incluyendo normas higiénicas para la manipulación de alimentos o el funcionamiento de actividades relacionadas con los alimentos.

57. Constantemente se revisan y modifican las reglamentaciones técnico-sanitarias que desarrollan el Código Alimentario Español. Como cuadro 6 se incluye la relación de Reales Decretos (reglamentos) y Ordenes Ministeriales (listas positivas de aditivos) que se han efectuado desde 1982. Estas modificaciones han tenido como objetivo, además de la adaptación técnica, la armonización de la legislación alimentaria española con la de la Comunidad Económica Europea.

58. Las normas sobre productos agrícolas y ganaderos están reguladas por Decretos de los años 1972 y 1973. Estas normas se publican como Reales Decretos de la Presidencia del Gobierno a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Economía y Comercio y Sanidad y Consumo.

b) Control de la producción alimentaria

59. El control de la producción alimentaria es responsabilidad de las comunidades autónomas. La responsabilidad es compartida por los Departamentos de Sanidad y Consumo, Agricultura y Comercio. Servicios especializados de estos Departamentos velan por el cumplimiento y aplicación de normas y reglamentos.

60. Cualquier actividad que implique la fabricación, manipulación, envasado, almacenaje o importación de alimentos está sujeta a su autorización por la comunidad autónoma donde radica y su inclusión en el Registro General Sanitario de Alimentos. Esta autorización debe renovarse cada cinco años.

61. Además de estas actividades los aditivos, materiales moleculares destinados a entrar en contacto con los alimentos, productos destinados a regímenes especiales, detergentes y desinfectantes utilizados por la industria alimentaria y aguas de bebida envasadas necesitan un registro específico de cada producto o formulación autorizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

62. Las autoridades municipales bajo la supervisión de los servicios especializados de las comunidades autónomas son las encargadas de verificar el cumplimiento de la legislación alimentaria. En cada municipio o agregación de pequeños municipios hay funcionarios, veterinarios y farmacéuticos, encargados del

/...

control sanitario de alimentos. Cada provincia dispone de un laboratorio para análisis bacteriológicos y químicos de alimentos como unidad analítica de apoyo a los pequeños municipios. Las grandes entidades de población disponen de laboratorios municipales dedicados al control alimentario.

63. El Ministerio de Agricultura dispone de un servicio de represión de fraudes que controla las infracciones a los reglamentos de los productos destinados a medios de producción agraria y de los procedentes de la agricultura y ganadería.

64. Desde el año 1982 se ha iniciado un cambio en el método de inspección tradicional para transformarlo en un sistema de control de puntos críticos derivado del análisis de riesgos. La administración central ha dotado de los presupuestos necesarios a las comunidades autónomas durante los años 1984 y 1985 para implantar el nuevo sistema y comenzar la transformación efectiva.

65. La prioridad en la implantación se ha dirigido a aquellos sectores de la industria alimentaria con mayor incidencia epidemiológica y a los que fabrican productos destinados a grupos de población con mayor índice de riesgo. Entre los sistemas especiales de control de productos alimenticios tenemos:

a) Red de vigilancia sobre radiaciones ionizantes:

- i) Una parte de la red se sustenta en una serie de puntos fijos de toma de muestras, situados en granjas, permanentes con pasto para alimentar ganado bovino lechero de cuya producción se toma mensualmente una muestra;
- ii) La segunda parte la constituye el control de radiocontaminación para pescados y agua de mar mediante análisis periódico de muestras procedentes de las mismas zonas marítimas. Los análisis de las muestras de ambas redes se realizan en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid;
- iii) Control de radiactividad en aguas de consumo público procedentes de redes de abastecimiento de aquellas poblaciones próximas a centrales nucleares.

b) Red de vigilancia sobre residuos de plaguicidas. Comprende la vigilancia de productos lácteos, platos preparados, pescados de acuicultura, frutas (cítricos), verduras (de consumo en crudo), huevos, grasas animales, cereales, aceites y conservas vegetales. La detección se realiza en muestras representativas de las mayores zonas productoras del país, obtenidas en los mercados centrales de capitales de provincia;

c) Red de vigilancia de productos zoonosanitarios. Se realiza sobre huevos, miel, animales de abasto, alimentos para niños y productos lácteos. Se controlan muestras procedentes de los centros de producción más importantes y de los mercados de mayor representatividad del país;

d) Red de vigilancia para detectar aflatominas. Se controlan muestras de leche, cereales, legumbres y alimentos infantiles con base de cereales, obtenidas de los almacenes o depósitos de las industrias dedicadas a la primera transformación de estos productos;

/...

e) Red de vigilancia de residuos de metales pesados. Se ejerce sobre frutas y verduras, conservas vegetales, alimentos infantiles a base de verduras, cafés solubles, envases y útiles vidriados. Las muestras para análisis son productos acabados que se recogen en los almacenes distribuidores;

f) Red de vigilancia de calidad y pureza de aditivos alimentarios. La vigilancia se hace sobre materias primas y productos acabados. Se da prioridad a los más conflictivos por la presencia de contaminantes y a los de mayor uso por la industria;

g) Red de vigilancia para la detección de biotoxinas marinas. Los productos del mar de consumo humano pueden ser afectados por la calidad del medio marino. Entre las causas naturales hay que destacar, por sus fatales consecuencias, las purgas de mar o mareas rojas, que se deben a la floración anormal de algas microscópicas, entre las que se encuentran especies productoras de toxinas que se acumulan principalmente en los moluscos. Este fenómeno creó la necesidad de desarrollar una red nacional de vigilancia para la detección de biotoxinas marinas y conseguir así la prevención de intoxicaciones alimentarias humanas por esta causa. Esta red está establecida en las zonas marisqueras de Galicia y en los puntos del Mediterráneo donde existen cultivos de mejillón. La red consta de dos áreas de actuación:

- i) Vigilancia del plancton. Responsable el Instituto Español de Oceanografía. Se vigila la presencia de especies tóxicas con tomas de muestras quincenales de diciembre a mayo y semanales de junio a diciembre. Además de la vigilancia de especies tóxicas se valoran los parámetros físico-químicos asociados a la aparición de la purga de mar;
- ii) Determinación de la toxicidad de muestras de mejillón y otros moluscos. Responsables los Servicios Sanitarios. Se determina tanto la presencia de veneno paralizante como de veneno gastro-entérico. La alerta se produce en el momento de detectarse especies tóxicas en el plancton y la extracción de moluscos se prohíbe en el momento de detectarse toxina en cantidades superiores a 40 kg por ml.

/...

Cuadro 6

Relación de Reales Decretos y Ordenes Ministeriales
que se han efectuado desde 1982

Norma	Título	Fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado
Reglamentación técnico-sanitaria	Aceites vegetales comestibles	21 de febrero de 1983
Lista Positiva	Aditivos aceites vegetales	16 de septiembre de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Aceitunas de mesa	6 de mayo de 1983
Lista positiva	Aditivos aceitunas de mesa	8 de octubre de 1983
Norma	Identidad y pureza de conservadores	9 de octubre de 1982
Norma	Asignación números identificación aditivos	13 de mayo de 1983
Norma	Identidad y pureza de aditivos	14 de octubre de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Aditivos alimentarios	28 de diciembre de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Aguardientes compuestos	28 de junio de 1982
Lista positiva	Aguardientes compuestos	4 de noviembre de 1982
Reglamentación técnico-sanitaria	Modificación de la reglamentación técnico-sanitaria	13 de julio de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Aguas potables de consumo público	29 de junio de 1982
Métodos	Analíticos especiales para aguas	13 de agosto de 1983
Lista positiva	Aditivos para aguas potables	9 de mayo de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Modificación de la reglamentación técnico-sanitaria de dietéticos	29 de junio de 1982
Reglamentación técnico-sanitaria	Anís	2 de abril de 1982
Reglamentación técnico-sanitaria	Carne de ave	17 de febrero de 1982
Lista positiva	Modificación aditivos bebidas refrescantes	13 de septiembre de 1982
Reglamentación técnico-sanitaria	Modificación de la reglamentación técnico-sanitaria de brandy	29 de octubre de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Café	30 de marzo de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Modificación de la reglamentación técnico-sanitaria de caldos y sopas	24 de noviembre de 1982
Lista positiva	Aditivos para caramelos y chicles	13 de septiembre de 1982
Reglamentación técnico-sanitaria	Modifica la reglamentación técnico-sanitaria de carnes	20 de febrero de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Industrias cárnicas	19 de mayo de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Establecimientos cárnicos	27 de febrero de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Caza	11 de noviembre de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Modifica la reglamentación técnico-sanitaria de la cerveza	11 de mayo de 1984
Lista positiva	Aditivos en cerveza	21 de enero de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Comercio minorista	27 de febrero de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Comedores selectivos	11 de noviembre de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Condimentos y especias	22 de diciembre de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Mataderos de conejos	30 de octubre de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Conservación de alimentos	27 de mayo de 1983
Norma	Características de los envases de conservas	30 de junio de 1983
Norma	Control contenido efectivo envases alimentos	20 de septiembre de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Detergentes	26 de enero de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Especies vegetales para infusiones	28 de diciembre de 1983
Normas	Calidad de las frutas y hortalizas frescas	15 de diciembre de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Galletas	4 de junio de 1982
Lista positiva	Modifica aditivos en galletas	4 de noviembre de 1982
Reglamentación técnico-sanitaria	Modifica la reglamentación técnico-sanitaria de la ginebra	29 de octubre de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Modifica la reglamentación técnico-sanitaria de grasas	24 de noviembre de 1982

/...

Cuadro 6 (continuación)

Norma	Título	Fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado
Reglamentación técnico-sanitaria	Harinas y sémolas	6 de julio de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Helados	1° de abril de 1983
Lista positiva	Aditivos en helados	27 de febrero de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Jarabes	27 de febrero de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Leche y productos lácteos	13 de octubre de 1982
Reglamentación técnico-sanitaria	Lejías	28 de enero de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Manipuladores de alimentos	20 de septiembre de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Masas fritas	20 de septiembre de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Materiales envases (poliméricos)	4 de junio de 1982
Lista positiva	Aditivos en poliméricos	24 de noviembre de 1982
Reglamentación técnico-sanitaria	Pan y panes especiales	19 de junio de 1984
Lista positiva	Modifica aditivos en panes	10 de agosto de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Modifica la reglamentación técnico-sanitaria de pastas alimenticias	11 de noviembre de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Pastelería (modificación)	29 de octubre de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Pesca y acuicultura	22 de agosto de 1984
Norma	Prohíbe el uso de ácido bórico en crustáceos	12 de enero de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Plaguicidas	24 de enero de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Sal	1° de junio de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Salsas de mesa	10 de mayo de 1984
Reglamentación técnico-sanitaria	Té y derivados	27 de mayo de 1983
Reglamentación técnico-sanitaria	Turrone y mazapanes	2 de agosto de 1982
Lista positiva	Modifica aditivos en turrone	13 de septiembre de 1982
Reglamentación técnico-sanitaria	Modifica reglamentación técnico-sanitaria whisky	24 de noviembre de 1982
Lista positiva	Aditivos para zumos de frutas y otros	27 de marzo de 1981
Reglamentación técnico-sanitaria	Zumos de frutas y otros vegetales	31 de marzo de 1983
Lista positiva	Aditivos zumos de frutas y otros	15 de julio de 1983

/...

2. Medidas tomadas para perfeccionar o reformar los regímenes agrarios existentes, a fin de conseguir la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales

66. Además de la continuación de las actividades generales de puesta en regadío, concentración parcelaria, etc., que se vienen efectuando todos los años, se han promovido y puesto en funcionamiento, entre otros, los programas o medidas que se indican a continuación.

a) Apoyo a la explotación familiar y a la promoción de los agricultores jóvenes

67. El Estatuto de la Explotación Familiar y de los Agricultores Jóvenes 1/ tiene entre sus objetivos estimular la incorporación progresiva a la dirección de las explotaciones familiares agrarias de los jóvenes agricultores colaboradores. Por ello, se han regulado 2/ una serie de ayudas a agricultores jóvenes que deseen mejorar la explotación familiar de la que son titulares, así como a aquellos que quieran establecer una explotación individual o colectiva de carácter cooperativo, bien en explotación independiente de la explotación familiar, o bien apoyándose en un programa de modernización o ampliación de la explotación familiar.

68. Las ayudas a los agricultores jóvenes consisten en préstamos y subvenciones vinculadas a la concesión de préstamos, según condiciones establecidas para la modernización de la explotación familiar, adquisición de tierras y adquisición y mejora de la vivienda de propio uso.

b) Desarrollo cooperativo y comunitario

69. En orden al fomento de las acciones comunitarias 3/ se conceden subvenciones con carácter de estímulo a la población agraria, que de forma organizada participe en la realización de acciones comunitarias en base a los acuerdos previamente establecidos por los interesados (familias y jóvenes agricultores). Las mejoras objeto de las acciones comunitarias, implican la realización de inversiones en mejora agraria (de infraestructura, abastecimiento de medios de producción, comercialización y servicios), equipamientos comunitarios y puesta en explotación de recursos subempleados.

c) Seguro agrario combinado

70. La Ley de Seguros Agrarios Combinados 4/ entre otros, tiene como puntos básicos su aplicación a los productos agrarios y forestales en todo el territorio del Estado y la suscripción voluntaria, excepto en algunos supuestos, realizada

1/ Ley 49/1981, de 24 de diciembre.

2/ Real Decreto 1932/1983, de 22 de junio.

3/ Orden de 3 de agosto de 1983.

4/ Ley 87/1978, de 20 de diciembre.

/...

a través de pólizas individuales o colectivas. Para su funcionamiento ha sido creada la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENASA), organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, que tiene como misión fundamental la propuesta del plan anual de seguros combinados en el que se determinan los riesgos a cubrir, el ámbito territorial de su aplicación, la superficie continua necesaria para la eventual declaración de obligatoriedad del seguro y su evaluación económica con el coste de su realización, aportación del Estado y distribución de la misma para subvención a las primas que han de satisfacer los asegurados. En la actualidad están establecidos 16 seguros, destacando el integral de cereales de invierno, pedrisco e incendio en cereales de invierno y leguminosas, helada y pedrisco en frutales (albaricoque, ciruela, manzana de mesa, melocotón y pera) y helada y pedrisco en viñedo para vinificación, variando la subvención entre un 40% y un 65%.

d) Arrendamientos rústicos

71. En 1980, se promulgó una nueva ley sobre los arrendamientos rústicos y las aparcerías 5/, en la que se desarrollan los aspectos generales de los mismos, las condiciones que deben cumplir las partes contractuales, el establecimiento de contratos-tipo de arrendamientos con los derechos y obligaciones de ambas partes 6/, la duración y terminación de los mismos, las particularidades de las rentas estipuladas, con su posible actualización anual, en el arrendamiento según el índice general de precios percibidos por el agricultor o de algunos de los productos agrarios, las obligaciones y derechos en la realización de gastos y mejoras útiles y sociales, los medios por los cuales el arrendatario tiene la facultad de acceder a la propiedad de la finca rústica y por último la jurisdicción sobre la materia.

e) Agricultura de montaña

72. La Constitución española establece que a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles se dispense un tratamiento especial a las zonas de montañas. Para ello 7/ se ha configurado un régimen jurídico especial para las zonas de agricultura de montaña con el fin de posibilitar su desarrollo económico y social, manteniendo un nivel demográfico adecuado y atendiendo a la conservación y restauración del medio físico, como hábitat de sus poblaciones. Su aplicación se lleva a efecto mediante programas de ordenación y promoción de los recursos agrarios de cada zona, que comprenden acciones y medidas sobre ordenación, recuperación, uso y defensa (del paisaje, rotación y uso de las tierras, conservación de suelos y protección de la flora y la fauna) sobre promoción y protección (fomento de la ganadería, de las denominaciones de origen, fomento de los regadíos, protección de las cooperativas agropecuarias y de la agricultura de grupo y protección de la arquitectura rural) y otras medidas (formación profesional y capacitación). La financiación corre a cargo del Estado, de las comunidades

5/ Ley 83/1980, de 31 de diciembre.

6/ Orden de 1.º de diciembre de 1981.

7/ Ley 25/1982, de 30 de junio.

/...

autónomas y de las entidades provinciales y locales, siendo las ayudas de tipo indemnizaciones, de carácter técnico, subvenciones y préstamos y por último en forma de exenciones, bonificaciones y reducciones fiscales.

73. Para conseguir la efectividad de los objetivos que se proponen se considera como aspectos fundamentales la participación de los interesados y la coordinación entre los distintos organismos que intervienen en su ejecución y financiación.

f) Ordenación y mejora de las explotaciones ganaderas extensivas

74. Con el fin de mejorar la situación creada por la disminución, en las últimas décadas, de las explotaciones ganaderas extensivas, quedando sin utilizar grandes superficies de pastos que con frecuencia han degenerado y registrándose al mismo tiempo una reducción en el censo de razas autóctonas, se ha establecido el programa nacional de ordenación y mejora de las explotaciones ganaderas extensivas 8/ cuyos objetivos principales son el estimular el aprovechamiento de los recursos naturales revalorizando las zonas desfavorecidas, promocionar las razas autóctonas fomentando la mejora de sus explotaciones y producciones y fomentar la explotación familiar y la ganadería extensiva de grupo.

75. Este programa nacional se aplica mediante programas específicos en los que se contemplan las áreas de aplicación, actuaciones a desarrollar, requisitos exigibles a las explotaciones beneficiarias, así como las ayudas económicas y técnicas necesarias por parte de las comunidades autónomas. Los tipos de ganado que se contemplan son las razas autóctonas de los ganados vacuno, ovino y caprino, ganado equino para producción de carne y ganado porcino de tronco ibérico, y las acciones auxiliares se refieren a mejoras permanentes (mejora de pastos, cerramientos, abrevaderos, construcciones para el ganado, suministro de energía eléctrica, etc.) adquisición de equipos (de ordeño mecánico y refrigeración de leche, maquinaria para recolección y almacenamiento de forrajes, básculas, etc.) y adquisición de ganado reproductor de razas autóctonas.

g) Plan de capitalización agraria

76. El plan de capitalización iniciado en 1982 9/ pretendía la modernización de explotaciones y la transformación en regadío por la iniciativa privada. Las ayudas contempladas en este plan eran créditos en condiciones muy favorables y en subvenciones para las inversiones a realizar.

h) Reestructuración del sector lechero

77. Con el objeto de corregir las notorias deficiencias que presentan las estructuras productivas del sector lechero, fue aprobado en 1981 el Reglamento Estructural de la Producción Lechera 10/ en él se recogen un conjunto de normas de

8/ Real Decreto 1552/1984, de 1º de agosto.

9/ Reales Decretos 200/1982 y 202/1982, ambos de 15 de enero.

10/ Real Decreto 2166/1981 de 3 de julio.

/...

ordenación y medidas de apoyo con la finalidad de promover la modernización de las explotaciones lecheras preferentemente familiares para que alcancen una producción competitiva y una viabilidad económica. Las transformaciones de las explotaciones realizadas mediante programas de mejoras concretas o de mejora integral de las explotaciones, reciben distintas ayudas según perceptores y finalidades.

i) Reconversión y reestructuración productiva del olivar

78. La necesidad de actualizar un marco económico que posibilite la mejora productiva de los olivares se ha concretado en un plan de reestructuración del olivar y de reconversión de comarcas olivareras deprimidas cuyos objetivos principales son:

a) Incrementar la productividad de los olivares de mejor aptitud, mediante la replantación, mecanización completa de las labores de cultivo, riego, mejora de la estructura viaria y otras acciones para mejora integral del olivar;

b) Favorecer la reorientación del olivar menos apto, mediante el impulso de nuevas actividades agrarias, preferentemente la reorientación de la actividad productiva hacia el aprovechamiento ganadero con la adecuación de la base territorial y la adquisición de ganado.

79. La concesión de las ayudas correspondientes se materializan en el plan citado y disposiciones complementarias.

j) Reestructuración y reconversión del viñedo

80. El análisis de la evolución de la viticultura española en los últimos años muestra un desequilibrio estructural del mercado de los vinos de mesa. Ello requiere una acción decidida fomentando la oferta de caldos de calidad y disminuyendo la de las producciones de peor calidad o de difícil comercialización lo cual ha implicado el desarrollo y aplicación de un Plan de Reestructuración y Reconversión del Viñedo 11/ mediante el rejuvenecimiento de las plantaciones, la renovación de los sistemas de explotación y otras acciones orientadas a la rentabilidad de la producción vitícola y a la mejora de su calidad, en el caso de reestructuración del viñedo y de la sustitución y reorientación productiva hacia otros cultivos y aprovechamientos, en el caso de su reconversión. Su aplicación se efectúa en las distintas zonas vitícolas declaradas como de actuación del plan y, dichas declaraciones contienen, entre otros aspectos instrumentales, las ayudas que puedan concederse a los empresarios agrarios que lleven a cabo las actuaciones que se contemplan en las propuestas específicas del plan.

81. Además, teniendo en cuenta que no es deseable la comercialización de los productos procedentes de los viñedos constituidos por híbridos productores directos, se ha determinado la aplicación de un programa de reconversión de dichos viñedos 12/ para fomentar su arranque y su sustitución por cultivos leñosos o herbáceos adaptados a las condiciones del suelo y a las perspectivas de mercado.

11/ Real Decreto 275/1984, de 11 de enero.

12/ Real Decreto 406/1984, de 11 de enero.

Para ello se conceden subvenciones y transcurrido el año 1985 se acordará el arranque de los viñedos constituidos por híbridos productores directos que aún existan.

3. Medidas tomadas para mejorar los métodos de producción, así como la cantidad y la calidad de los alimentos producidos, para aumentar el rendimiento por unidad de tierra cultivada y para mejorar los métodos empleados en la ganadería, incluida la salud animal mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, en particular

- a) Promoción de la investigación agrícola e introducción y uso de materiales, equipos y técnicas apropiadas
- b) Medidas para divulgar los conocimientos sobre el uso de dichos materiales, equipos y técnicas

82. Algunas de las actuaciones indicadas en los distintos apartados de este mismo artículo tienden a la mejora de los métodos de producción, así como las actividades para la mejora del cultivo de los distintos productos, desarrollados por el Departamento (demostraciones de maquinaria, etc.) y en particular por el Servicio de Extensión Agraria. Además merecen destacarse las actuaciones que se indican a continuación.

- c) Investigación y experimentación

83. La investigación y la experimentación agrarias constituyen dos pilares básicos para el progreso y la potenciación de la actividad agrícola, ganadera y forestal. Actualmente en el Estado de las autonomías se han definido las competencias, funciones y servicios que se reserva la Administración del Estado, y aquellas otras funciones que han de realizarse en concurrencia y la forma de cooperación. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), como responsable de todas las acciones que en materia de investigación agraria son competencia del MAPA, pasa a ser, en este nuevo encuadre, el órgano coordinador de seguimiento y control de la investigación que, realizada a través de programas nacionales enfocará aquellos objetivos básicos y directrices generales que respondan a las necesidades de la agricultura española dentro de una política agraria coherente. En 1983, se ha procedido a la elaboración del Plan Nacional de Investigación Agraria, que recoge y articula el nuevo modelo programático y sus mecanismos operativos, y que una vez contrastado con las comunidades autónomas y las OPAS constituirá el marco de referencia de la investigación agraria para el cuatrienio 1984-1988. Se han establecido seis áreas de investigación agraria, en las que se encuadrarán los programas nacionales: cultivos herbáceos, cultivos leñosos, producción animal, desarrollo forestal, recursos naturales y economía y sociología agrarias. Dentro de las muy variadas líneas de investigación emprendidas cabe señalar, entre las principales, las que se comentan a continuación:

- a) Cultivos herbáceos. Esta área comprende cuatro programas: cereales, leguminosas, hortícolas y ornamentales y plantas de gran cultivo. Las líneas de investigación sobre cereales están encaminadas principalmente a la obtención de nuevas y mejores variedades, bien adaptadas a las condiciones españolas, tanto de trigos duros como blandos. Respecto a trigos, cebadas y triticales, se mantiene

/...

una estrecha colaboración con el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y del Trigo (CIMMYT), que se traduce en intercambios y ensayos de material. Al programa de leguminosas-grano se le está prestando una gran atención, es un programa a potencia. Las leguminosas pratenses son también objeto de selección y mejora genética. En horticultura, las principales especies son objeto de estudios dirigidos a la selección y mejora, así como al control de plagas y enfermedades, y a la determinación de los parámetros más favorables cuando se trata de cultivos en invernadero. En plantas de gran cultivo se viene prestando una atención preferente al grupo de oleaginosas, girasol, cártamo y colza, sin olvidar otras plantas industriales como la remolacha, la caña de azúcar y el algodón. La recolección, conservación, evaluación y documentación de los recursos genéticos, autóctonos constituye otra preocupación primordial del INIA. Estos trabajos, coordinados por el banco de germoplasma vegetal, van encaminados principalmente a evitar la pérdida de variedades y ecotipos amenazados de extinción;

b) Cultivos leñosos. Engloba esta área los programas de agrios, fruticultura, olivicultura y viticultura. En la investigación en agrios es muy amplio el espectro de líneas de investigación de este programa: estudio de las virosis mediante técnicas de cultivo de tejidos in vitro, obtención de plantas libres de virus, banco de germoplasma de agrios, lucha contra plagas, técnicas de cultivo, fertilidad del suelo y fertilización, riego, conservación e industrialización, obtención y selección de variedades, estudios sobre fisiología de la floración y de la nutrición. Los trabajos de fruticultura comprenden los referentes a frutales de zonas templadas y a frutales subtropicales (sur de España e Islas Canarias). En olivicultura, las principales líneas de investigación se dirigen principalmente a: la selección sanitaria, mecanización, la recolección, técnicas de cultivo, elaboración del aceite, eliminación y aprovechamiento del alpechin. Tratan todos estos trabajos de favorecer la rentabilidad de este cultivo, tan importante para España. El programa de viticultura abarca los aspectos vitícolas y enológicos;

c) Producción animal. Esta área comprende cuatro programas: producción bovina, producción ovina y caprina, producción porcina, aviar y otros, y pastos y forrajes:

- i) Producción bovina: se ha dedicado especial atención al estudio de sistemas productivos que permitan el correcto aprovechamiento de los recursos naturales (pastos, forrajes, etc.) para disminuir, cuanto sea posible, la dependencia de las importaciones de materias primas necesarias para la elaboración de piensos. Factor esencial en la producción bovina es la investigación permanente sobre los procesos patológicos que amenazan a la ganadería vacuna y ocasionan pérdidas elevadas en la producción;
- ii) Producción ovina y caprina: por su condición de rumiantes estas especies están llamadas a desempeñar un papel fundamental en el aprovechamiento, mediante pastoreo racional, de áreas agrícolas marginales, así como en la revalorización de subproductos agrícolas y agroindustriales. Junto a la mejora de pastos, se investiga el incremento de fertilidad y prolificidad de los rebaños;

/...

- iii) Ganado porcino, aviar y otros: el grave problema que plantea a España la presencia de peste porcina africana hace que, por parte del INIA, se preste una atención preferente a la investigación de esta enfermedad del ganado porcino;
 - iv) Pastos y forrajes: la obtención de variedades de forrajes y pratenses y su posible adaptación a las condiciones de las diferentes regiones españolas es una línea de trabajo del INIA que ha dado buenos resultados.
- d) Desarrollo forestal. El área de desarrollo forestal encuadra tres programas nacionales que responden a fases de una misma secuencia: conservación del medio natural, producción forestal e industrias forestales:
- i) Conservación del medio natural. Se estudian métodos de prevención de incendios forestales, incluyendo en ellas alternativas de aprovechamiento para las poblaciones rurales de las zonas más afectadas por el problema. Se realizan estudios ecológicos para la zonificación de usos de los montes con miras a su mejor utilización y aprovechamiento en base a su calidad productora;
 - ii) Producción forestal. Se investiga fundamentalmente la mejora genética orientada al mejoramiento de la calidad y cantidad del producto y a su resistencia a factores negativos, el desarrollo de la populicultura y la producción de biomasa con frondosas de crecimiento rápido;
 - iii) Industria, forestales. La materia prima debe ser valorada suficientemente y mediante una investigación adecuada se pueden obtener diversos usos de la madera. Por otra parte, el empleo de las técnicas adecuadas en las industrias mejora el producto final y aumenta la competitividad de las empresas.
- e) Recursos naturales. En el área de recursos naturales se abordan una serie de temas de investigación que afectan a un sistema completo de producción o al medio rural de forma general. Los principales temas que se abordan dentro de esta área son:
- i) Riego. Se están llevando a cabo proyectos de investigación en relación con los siguientes temas: eficacia de los distintos sistemas de riego, problemas de salinización de suelos por el riego y utilización de aguas residuales para riego;
 - ii) Energía en el medio rural. Se continúan las investigaciones sobre sistemas de ahorro de energía de explotaciones agrarias, la utilización de la energía solar y energía geotérmica, y el aprovechamiento energético de los residuos agrarios y agroindustriales;
 - iii) Uso de fertilizantes y fertilidad del suelo. Se sigue desarrollando con gran amplitud el programa de fijación de nitrógeno atmosférico. Se desarrollan también proyectos sobre la utilización como fertilizantes y enmiendas de determinados residuos y subproductos (lodos de depuradoras urbanas, lisieres);

/...

- iv) Defensa del medio ambiente agrario. Prosiguen las investigaciones sobre determinación del medio ambiente agrario por residuos urbanos o industriales, especialmente por sustancias que contengan metales pesados.

f) Economía y sociología agrarias. Dentro de los distintos estudios que se llevan a cabo en esta área tiene un especial significado el referente a las zonas deprimidas de nuestra geografía, que trata de posibilitar soluciones aptas para invertir su situación.

d) Semillas y plantas de vivero

84. La oferta de material vegetal de reproducción de calidad, controlado por el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, ha seguido en los últimos años una línea claramente ascendente. Los cereales de fecundación autógena han sido objeto de especial atención, tanto por su importancia económica como por los bajos índices de utilización de semilla certificada que tienen. En arroz, maíz y sorgo, así como en oleaginosas e industriales (girasol, algodón, remolacha, etc.), los índices de utilización de semilla certificada se mantienen muy elevados, aunque quepa destacar la disminución de las ventas de semilla de maíz híbrido en favor de la de girasol, causada por las dificultades de riego en algunas zonas en estos últimos años. La importancia de este medio de producción ha hecho que en 1982, dentro del programa de inversiones públicas se incluya el programa "Fomento de la utilización de semillas y plantas de vivero de calidad" estableciéndose las siguientes líneas de acción:

a) Reducir el coste de la semilla al agricultor mediante la concesión de créditos a bajo interés y la consecución de un acuerdo interprofesional entre las OPAS y los productores de semillas para la limitación del incremento anual de precios;

b) Aumento de los conocimientos técnicos del agricultor sobre semillas y plantas de vivero;

c) Difusión de las ventajas que reporta al agricultor el empleo del material vegetal de reproducción controlado.

e) Defensa de las producciones animales

85. El nivel sanitario de nuestra cabaña nacional condiciona en gran medida los métodos de lucha para controlar las enfermedades y las pérdidas en el conjunto de las producciones animales. Se ha de resaltar el avance conseguido en los últimos años, en especial en lo referente a la intensificación de la lucha llevada a cabo a través del Plan Nacional de Erradicación de la tuberculosis y brucelosis bovina. La política de defensa de las producciones ganaderas pretende conseguir unos niveles sanitarios homologables a los países de mayores cotas sanitarias, poniendo en práctica todo tipo de medios de lucha contra las epizootias que propicie la consecución de dicho objetivo. Dentro de las actuaciones en defensa de las producciones animales cabe hacer resaltar en orden a su importancia las siguientes:

/...

a) Tuberculosis y brucelosis. Se continúan e intensifican las campañas contra la tuberculosis y brucelosis bovina de acuerdo con el plan iniciado en 1978, prosiguiendo con la ayuda, destinada a los ganaderos que precisan reponer animales sacrificados por las acciones de saneamiento, en forma de subvención mediante la entrega de un animal sano por cada tres enfermos;

b) Peste porcina. La peste porcina africana sufrió un recrudecimiento en 1983, consecuencia de una mayor incidencia en relación con años precedentes. La mayor incidencia de focos se ha producido en los cebaderos, seguido de las explotaciones familiares y de las pequeñas granjas de producción. Pero por otra parte han sido declaradas zonas libres de la enfermedad las provincias de Albacete y Guadalajara, hallándose en estado avanzado de precalificación Cantabria y el Principado de Asturias, donde el muestreo serológico se está finalizando con resultados favorables. Además se ha puesto en marcha un plan experimental, ampliándose el seguro de peste porcina africana;

c) Fiebre aftosa. La aparición en 1983 de una onda epizootica de la enfermedad que afectó a bovinos, ovinos y caprinos de las provincias del centro y noroeste peninsular ensombreció la buena situación que España venía manteniendo en los últimos años gracias a los altos niveles de vacunación conseguidos en porcino y los relativamente elevados en vacuno. La enfermedad afectó con relativa benignidad en adultos y con elevada mortalidad en animales jóvenes de las especies ovina y caprina. Las medidas adoptadas fueron las de inmovilización, aislamiento, supresión de ferias y mercados y del movimiento pecuario y vacunación de todos los animales de las especies receptibles. Las normas dictadas en 1983 para la lucha contra la fiebre aftosa contemplan por primera vez el sacrificio con indemnización de los animales enfermos en todo el territorio del Estado.

4. Medidas tomadas para mejorar y divulgar los conocimientos relativos a los métodos de conservación de alimentos, en particular para reducir (por ejemplo, mediante la lucha contra las plagas y unos servicios adecuados de almacenamiento) las pérdidas que se producen durante los cultivos y después de ellos, y para impedir la degradación de los recursos (por ejemplo, mediante la conservación de los suelos y la ordenación del agua)

86. Como actuaciones significativas se indican a continuación las desarrolladas por el Servicio de Defensa contra Plagas y las de apoyo al almacenamiento de los productos por los propios agricultores además de la lucha contra la erosión, la conservación de los suelos agrícolas y la preservación y lucha contra los incendios forestales.

a) Defensa de las producciones vegetales

87. El agricultor es auxiliado en la defensa de los vegetales y sus productos por el Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica cuyas actuaciones se pueden agrupar en las siguientes líneas:

a) Lucha preventiva y campañas contra plagas. Las plagas de mayor importancia en la actualidad son: la langosta, la mosca del olivo, la mosca del mediterráneo y la procesonaria del pino. Cada año de acuerdo con las comunidades autónomas se fijan las campañas de interés general a realizar y la distribución de

/...

los recursos que se realiza a través del Servicio de Defensa contra Plagas. Estas campañas son complementadas con tratamientos individuales realizadas por agricultores. Además se continúa con la experiencia antigranizo coordinando y subvencionando las campañas con agrupaciones de agricultores y entidades locales;

b) Control de medios de defensa vegetal. Las funciones se orientan fundamentalmente a garantizar la idoneidad de los productos y a evitar daños a la fauna y medio ambiente;

c) Inspección fitopatológica. Las normas técnicas sanitarias a que han de ajustarse los intercambios internacionales de productos vegetales se rigen por el Comercio Internacional de Protección Fitosanitaria de 10 de diciembre de 1951, que ha sido suscrito y ratificado por España.

b) Almacenamiento y secado de granos

88. Se han establecido líneas de ayuda 13/ para las entidades asociativas agrarias que pretendan la construcción y mejora de almacenamiento para cereales y otros granos, las instalaciones y maquinaria para el acondicionamiento, limpieza y clasificación de grano y las instalaciones y maquinaria destinadas al secado de granos. Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las cooperativas y otras entidades asociativas de agricultores y ganaderos y para su concesión se tiene en cuenta las necesidades de almacenamiento, la localización geográfica y el número de miembros de la entidad asociativa.

89. También entre las medidas promulgadas para el fomento del cultivo del maíz 14/ se encuentran ayudas a conceder a las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias para la construcción, mejora de instalaciones y adquisición de maquinaria destinada al almacenamiento y secado del maíz.

c) Lucha contra la erosión y la desertificación

90. La pérdida de tierras para la producción agrícola, el aterramiento de los embalses, así como la regulación del régimen hidrológico y la defensa de poblados, obras de infraestructura y regadíos contra las inundaciones son problemas que adquieren extrema gravedad en la vertiente mediterránea.

91. La restauración y corrección hidrológica forestal comprende el conjunto de estudios, proyectos y actuaciones que se realizan destinados al control de los fenómenos de erosión y de las avenidas y recursos hídricos. Dentro de estas actividades está incluido el Proyecto LUCDEME (Lucha contra la desertificación en el Mediterráneo), en el que, siguiendo las recomendaciones del Plan de Acción para combatir la desertificación establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación, celebrada en Nairobi en 1977, se concentran, como zonas más afectadas, los esfuerzos nacionales de estudios, investigaciones y experiencias sobre el tema.

13/ Real Decreto 2122/1984, de 10 de octubre.

14/ Real Decreto 1733/1984, de 1º de agosto.

/...

d) Conservación de suelos agrícolas

92. En la conservación de suelos agrícolas se sigue el criterio de atender las peticiones de los agricultores, aislados o agrupados, en cuyas fincas existan problemas de tipo erosivo y realizar trabajos de tipo experimental y de demostración de técnicas de laboreo en las fincas en que se hayan ejecutado previamente obras de conservación de suelos.

e) Preservación y lucha contra los incendios forestales

93. Las actuaciones del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) en relación con los incendios forestales se pueden agrupar en: a) acciones para la prevención de incendios, mentalizando a los ciudadanos en materia de prevención y, por otro lado, efectuando trabajos de silvicultura preventiva; b) acciones para detección de incendios, con instalación de puestos de vigilancia y renovación de las redes de emisoras; y c) organización de los trabajos de extinción de incendios, con la organización de cuadrillas y ampliación del parque de vehículos contra incendios con apoyo de los aviones anfibios Canadair.

5. Medidas tomadas para mejorar la distribución de alimentos, tales como mejoramiento de las comunicaciones entre las zonas de producción y los centros de comercialización, facilitación del acceso a los mercados, introducción de medidas de apoyo y estabilización de los precios, lucha contra las prácticas abusivas y garantía de suministros mínimos a los grupos necesitados

94. Las actuaciones llevadas a cabo en el campo de la comercialización agraria dan prioridad al ajuste de las producciones en función de las previsiones de demanda; promoviendo la integridad cooperativa y potenciando la eficacia de las agrupaciones a través de la contratación y formación de gerentes; desarrollando la agricultura contractual; facilitando la presencia de los productores en los mercados centrales y especialmente potenciando la prestación de servicios comerciales a las cooperativas a través de la red de mercados en origen.

a) Agrupaciones de productos agrarios

95. En 1978 se constituyó la Federación Española de Agrupaciones de Productores Agrarios (FEAPA) con el fin de representar y promocionar sus intereses generales comunes, apoyando la comercialización en común en origen de los productos agrarios, concentrando, tipificando y en definitiva, ordenando las ofertas. Las ayudas que reciben las agrupaciones de productos agrarios se concretan en subvenciones durante los tres primeros años de su funcionamiento según el valor de los productos vendidos, créditos de campaña para poder efectuar anticipos a los socios y subvenciones y créditos para inversiones en instalaciones de almacenamiento, manipulación, conservación y transformación industrial.

/...

b) Formación y gestión en agrupaciones del medio agrario

96. Las empresas asociativas del medio agrario que requieran equipos de personal directivo y técnico con una preparación actualizada así como la formación adecuada de las personas que desempeñan las funciones rectoras y del conjunto de los socios, tienen acceso a una serie de auxilios 15/ para formación que se concretan en:

a) Becas para cursos y actividades formativas articuladas en planes de capacitación y ciclos progresivos;

b) Becas para la realización de estancias en empresas con fines de aprendizaje práctico, de una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional;

c) Formación de nuevos diplomados mediante la realización de convenios entre la administración y centros de enseñanza superior.

97. Además se podrá subvencionar durante tres años la contratación de personal especializado por cooperativas y entidades agrarias asociativas cuyo objetivo social incluye la comercialización en común de productos agrarios.

c) Contratos agrarios

98. Se han promulgado las disposiciones 16/ sobre contratación de productos agrarios, estableciendo los principios de economía contractual aplicables al tráfico de dichos productos con objeto de promover las relaciones contractuales entre las empresas agrarias, por una parte, y las de industrialización o, en su caso, las de comercialización, por otra, cuando ambas partes, sometiendo sus acuerdos y contratos a la homologación de la administración agraria competente, pretenden acogerse a los estímulos que se establecen.

d) Comercialización en común de productos agrarios

99. Con el fin de fomentar la comercialización en origen de los productos agrarios e incrementar la presencia de asociaciones de productores en los mercados urbanos de abastecimiento se conceden ayudas 17/, a las cooperativas agrarias y entidades asociativas de comercialización para:

a) Gastos comunes de gestión administrativa (de constitución, personal y seguro) durante el primer ejercicio;

b) El acceso a la titularidad de puestos de venta en mercados centrales de abastecimiento, siempre que se garantice una presencia permanente en los mercados y la comercialización de productos de categorías extra o primera;

15/ Orden de 8 de septiembre de 1983.

16/ Real Decreto 2707/1983, de 7 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 19/1982, de 26 de marzo.

17/ Orden de 13 de septiembre de 1983.

/...

c) Nuevas instalaciones y equipamientos comerciales o centrales de distribución, cumpliendo la legislación vigente y comercializando productos de categoría extra o primera;

d) Para establecimiento y ampliación de instalaciones de almacenamiento, tipificación, acondicionamiento, conservación y transformación de productos, siempre que el producto comercializado supere cierto volumen y que el número de agricultores integrados no sea inferior a 25;

e) La participación de las entidades asociativas agrarias en el capital social de la red de mercados en origen, con límite máximo de la ayuda.

e) Comercialización en origen y en destino

100. La ordenación de los mercados en origen de productos agrarios tiene como objetivo la mejora de las transacciones entre productores y comerciantes, promoviendo la concentración de la oferta y fomentando la tipificación de los productos además de la búsqueda de nuevos mercados facilitando el envío de los productos tanto al mercado interior como exterior. La Empresa Nacional MERCORSA (Mercado en Origen de Productos Agrarios S.A.) creada como medio más ágil de funcionamiento y ejecución de los fines previstos, se enfoca, en la nueva situación, dentro de un planteamiento de servicios comerciales a los agricultores y a las cooperativas, procediendo a la reestructuración de la empresa.

101. Por otra parte con la Empresa Nacional MERCASA (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.), se pretende que dentro de sus actividades preste una adecuada atención a los agricultores, con el fin de que cooperativamente o de modo individual a través de pabellones de "situados" puedan aproximarse a los escalones minoristas. Igualmente, se trata de asegurar comodidad, ahorro económico y garantía para los consumidores.

6. Medidas tomadas (inclusive la adopción de normas alimentarias) para reducir la adulteración y la contaminación de los alimentos y para mejorar su calidad y su seguridad, al nivel de la comercialización y del almacenamiento, así como la higiene alimentaria a todos los niveles

102. Los dos grandes frentes de actuación en el campo de la política alimentaria son la seguridad alimentaria y la mejora de la calidad de los alimentos, que se indican a continuación.

a) Seguridad cualitativa alimentaria

103. En relación con la mejora de los servicios de inspección y control, la legislación promulgada ha permitido conseguir la necesaria eficacia y agilidad en los sistemas de inspección agroalimentaria y sanción correspondiente de las infracciones. La inspección de calidad en el campo de la producción de alimentos garantiza a la industria alimentaria la calidad de sus materias primas y además controlando su producción evita distorsiones en el normal desarrollo de sus mercados por posibles fraudes, colaborando a la defensa del consumidor. Se ha de destacar como función de apoyo para el debido control analítico la actividad desarrollada por la Red de Laboratorios Agrarios del Estado. Sin embargo, la

/...

tendencia decreciente en las sanciones impuestas por el Servicio de Inspección contra Fraudes en los distintos sectores pone de manifiesto una mejora en la calidad de la producción agroalimentaria.

b) Mejora en la calidad de los alimentos

104. La continua elaboración y puesta al día de las normas de calidad de los distintos productos pretende establecer un cuerpo normativo que, entre otros aspectos defina los alimentos, determine los parámetros de calidad que han de satisfacer y defina las condiciones que deben cumplir para su venta. Sin embargo se pretende la implantación de las marcas alimentarias de calidad que distingan las calidades específicas superiores, potencia la competitividad de los pequeños productores y proteja la demanda. Por otra parte, las reglamentaciones técnicas sanitarias de los distintos grupos de industrias agroalimentarias se centran fundamentalmente en los aspectos sanitarios de los mismos, teniendo por lo tanto una relación muy directa con la salud pública.

C. Derecho a disponer de ropa adecuada

105. No existen disposiciones concretas sobre este punto.

D. Derecho a la vivienda

1. Principales leyes, reglamentos administrativos y acuerdos colectivos destinados a promover el derecho a la vivienda y decisiones de los tribunales pertinentes

106. El artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer uso efectivo de este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

107. Partiendo de esta norma básica constitucional, son numerosas las disposiciones, algunas anteriores a la Constitución, que tienden a dar efectividad al principio programático que contiene. Estas disposiciones se dividen en dos grandes grupos, según se refieran a viviendas de protección oficial o a viviendas libres.

108. Desde el punto de vista de la política social y económica, se pueden señalar a continuación cuatro razones básicas que hacen de la vivienda un sector que requiere una consideración específica en cualquier programa de Gobierno:

a) Que la Constitución, como anteriormente se señala, ampara el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, comprometiendo a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho;

/...

b) Sus efectos en los procesos distributivos de la renta y la riqueza permiten utilizar la política de vivienda como mecanismos para una equitativa asignación de los recursos;

c) Su importancia en los procesos de crecimiento por su efecto multiplicador sobre otros sectores y por su efecto en el empleo;

d) Su utilización como instrumento de estabilización económica y como elemento en la reactivación.

109. Por otra parte, la actuación de los poderes públicos que contempla la Constitución es múltiple, ya que en los distintos niveles políticos y administrativos se produce una diversificación de competencias.

110. En función de esta necesaria pluralidad de actuaciones, es evidente que una racionalización de la política de vivienda conlleva necesariamente una planificación general por parte del Estado y un mayor protagonismo en la gestión por parte de las comunidades autónomas y corporaciones locales.

2. Información sobre las medidas adoptadas, inclusive los programas, subsidios e incentivos fiscales, específicamente destinados a fomentar la construcción de viviendas a fin de satisfacer las necesidades de todas las categorías de la población, en particular de las familias de bajos ingresos

a) El plan trienal 1981-1983

i) Objetivos

111. El Real Decreto 2455/1980, de 7 de noviembre, aprobó un programa destinado a financiar la construcción de 571.000 viviendas de protección oficial (90.000 de promoción pública y 481.000 de promoción privada), para lo que se preveía la movilización de Ptas 1.375.000.000 durante el trienio 1981-1983 en recursos financieros y presupuestarios.

112. El objetivo o la finalidad perseguido era doble, ya que de un lado permitiría el acceso a la vivienda de un gran número de personas, dado el tratamiento subjetivo de la financiación, y por otro, fomentar el empleo mediante la inversión en vivienda, objetivo éste casi prioritario según se deduce del propio preámbulo del Real Decreto.

ii) Instrumentos financieros

113. Partiendo del entramado legal del Real Decreto Ley 31/1978 de 31 de octubre, desarrollado por el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, que preveía ya el sistema de financiación para la promoción pública y privada de las viviendas de protección oficial, el Plan Trienal se basaba en establecer unas líneas de crédito privilegiadas, en las que los préstamos base para la promoción, y adquisición de viviendas, resultaran para el adquiriente a un interés del 11%, con un plazo de amortización de 15 años (los tres primeros de carencia y los restantes 12 de

/...

amortización), partiendo de que el interés para las entidades de crédito era el 14%, por lo que los tres puntos del diferencial de intereses eran subvencionados por el Estado, vía presupuestos generales, a través del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda (IPPV).

iii) Datos estadísticos y valoración

114. La Comisión de Seguimiento del programa de construcción de viviendas de protección oficial 1981-1983, a la vista de los últimos datos, considera que el grado real de cumplimiento del Plan Trienal de vivienda se sitúa en torno al 90%, "habiendo conseguido, además de un saneamiento previo del sector de la vivienda de protección oficial, una estabilización del mismo", según el informe que dicha Comisión ha prestado a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La situación acumulada de las concesiones de créditos desde el origen del programa hasta el 31 de diciembre de 1983 es así:

/...

	Concesiones de		Formalizaciones de		Dispos. de crédit. a	
	Miles	créditos	Miles	créditos	la fec. S/objet	Miles
	viviendas	mill. ptas.	viviendas	mill. ptas.	mill. ptas.	mill. ptas.
1. Promoción directa	87,8	216 438	87,8	216 438	-	138 803
2. Crédito oficial	123,6	264 658	-	-	143 483	187 817
3. Cajas de ahorro	189,2	401 711	130,1	250 480	204 442	266 870
a) Coeficiente de regulación especial	35,4	58 389	92,2	49 214	38 950	46 956
b) Subsidiación intereses	153,8	343 322	100,9	201 266	165 492	219 914
4. Banca privada	106,8	227 738	-	-	108 069	154 760
a) Directos	14,6	34 941	9,1	24 726	14 505	19 546
b) A través del crédito oficial	92,2	192 797	-	-	93 564	135 214
Totales	507,4	1 110 545	-	-	-	748 250

/...

115. En total un volumen de concesiones de 1.110.500 millones, un 88,9% del objetivo previsto. Si sumamos los créditos de las Cajas Vascas y los de la banca, vía convenios con el hipotecario, el cumplimiento del Plan es del 90,2%.

116. Como puede observarse, en este aspecto los desfases entre las previsiones y las realizaciones fueron mayores, si bien puede considerarse que se mantuvo el nivel de actividad del sector de construcción de viviendas de protección oficial.

117. El grado de cumplimiento del Plan Trienal en unidades físicas de viviendas puede observarse en los cuadros 7 y 8.

Cuadro 7

Grado de cumplimiento del Plan Trienal 1981-1983

(En miles de viviendas)

	1981	1982	1983
Objetivo:			
Promoción pública	30	30	30
Promoción privada	150	165	165
Total	180	195	195
Iniciadas:			
Promoción pública	30,6	19,4	29,2
Promoción privada	116,8	115,6	108,9
Total	147,4	135,0	138,1
Terminadas			
Promoción pública	10,2	19,8	27,5
Promoción privada	106,9	111,4	107,9
Total	117,1	131,3	135,4

/...

Cuadro 8

Evolución de la iniciación y de la terminación de viviendas

Año	Régimen	Viviendas iniciadas acumuladas a I-I	Viviendas terminadas acumuladas a I-I
1981	Viviendas de protección oficial, promoción privada	107 579 <u>a/</u>	106 899
	Viviendas de protección oficial, promoción pública	30 557	12 810
	Total, viviendas de protección oficial	138 136	119 709
	Libre	102 986	115 942
	Total, viviendas de protección oficial y libre	241 122	235 651
1982	Viviendas de protección oficial, promoción privada	107 573 <u>a/</u>	111 446
	Viviendas de protección oficial, promoción pública	19 430	19 847
	Total, viviendas de protección oficial	127 003	131 293
	Libre	90 964	103 726
	Total, viviendas de promoción oficial y libre	217 967	235 019
1983	Viviendas de protección oficial, promoción privada	105 841 <u>a/</u>	107 856
	Viviendas de protección oficial, promoción pública	29 218	27 484
	Total, viviendas de promoción oficial	135 059	135 840
	Libre	91 849	91 711
	Total, viviendas de protección oficial y libre	226 908	227 051
1984	Viviendas de protección oficial, promoción privada	107 728 <u>a/</u>	112 577
	Viviendas de protección oficial, promoción pública	14 029	14 413
	Total, viviendas de protección oficial	121 757	126 990
	Libre	79 767	62 521
	Total, viviendas de protección oficial y libre	201 524	189 511

a/ Avances dados a conocer en su momento. El archivo ya depurado de esta Dirección General arroja los siguientes resultados: 116.858 viviendas realmente iniciadas en 1981, 116.674 en 1982, 108.862 en 1983. Cabe estimar para 1984 un mínimo de 110.000 viviendas iniciadas, cifra que previsiblemente aumente una vez depurada.

/...

b) El Plan Cuatrienal 1984-1987

i) Objetivos generales de la política de vivienda desde 1984

118. Una reflexión de conjunto sobre los problemas básicos que afectan a la política de vivienda, lleva a la fijación de una serie de metas y objetivos entre los que cabe destacar lo siguiente:

a) Un esquema de apoyo económico y financiero totalmente personalizado, que permita una adecuada satisfacción de las necesidades y que se complemente con el funcionamiento de un mercado hipotecario que permita la rotación de capital y la movilidad residencial;

b) Un parque público de vivienda en buen estado que admita la movilidad de usuarios e inquilinos, según sus propias necesidades y un stock de viviendas desocupadas que pueda considerarse como normal y que cumpla una función de flexibilización del mercado;

c) Un importante volumen de inversión en rehabilitación generalizada y un incremento de inversión en mejoras urbanas que permita la corrección de desequilibrios ambientales;

d) Y, por último, que se aprecien los resultados positivos en la relación coste-calidad, como consecuencia de la racionalización productiva y de la existencia de un esquema normativo totalmente desarrollado a los niveles municipal, autonómico y central.

ii) Elementos generales de la política de vivienda

iii) Cambio del modelo de gestión

119. En primer lugar hay que considerar el cambio de modelo de gestión. La consolidación del estado de las autonomías con la terminación del proceso de transferencias así como la consagración constitucional de la autonomía municipal, exige recibir totalmente el modelo de gestión, hasta ahora fuertemente centralizado. Los objetivos perseguidos son los siguientes:

a) Hacer efectiva la transferencia de competencias a las comunidades autónomas y potenciar el ejercicio de estas competencias, así como las propias de los ayuntamientos;

b) Creación de órganos de encuentro, entre representantes de las comunidades autónomas y de la administración del Estado;

c) Establecimiento de un sistema coordinado de planificación, programación y seguimiento del sector vivienda.

iv) Nuevas fórmulas de financiación

120. Otro elemento de la nueva política de vivienda y de la regulación del derecho a la misma es el replanteamiento de las fórmulas de financiación. Este aspecto es, junto con la fijación del monto global de recursos asignados por el Estado y entidades financieras al sector el componente básico del nuevo Plan Cuatrienal.

/...

121. En cuanto al replanteamiento de las fórmulas de financiación, de características esenciales - similares para todos los niveles de renta - son: un aumento del préstamo, que alcanza el 75% del módulo frente al 70% en el Plan Trienal; un aumento del plazo de amortización de 12 a 13 años; y la introducción del sistema de cuotas crecientes para la amortización del capital, frente a las cuotas constantes del Plan Trienal.

122. Atendiendo ya a los distintos niveles de renta de los adquirentes, los tipos de interés aplicables a los préstamos van desde el 6% hasta el 11%, para familias con ingresos anuales inferiores al 3,5 veces el salario mínimo interprofesional, con posibilidades de subvenciones personales, entre Ptas 120.000 a Ptas 220.000, en función del tamaño familiar.

123. La puesta en marcha del Plan Cuatrienal 1984-1987, a través de la aplicación de los instrumentos presupuestarios y financieros, implica la utilización de unos recursos que se pueden deducir de la aplicación de una serie de hipótesis medias a un programa anual similar al propuesto para 1984.

124. Estas estimaciones conducen a unas necesidades de financiación para vivienda del orden de Ptas 350 millones, tanto para vivienda nueva como para rehabilitación de las existentes, aspecto este último, que ha ido cobrando mayor relevancia a medida que ha ido avanzando la realización del Plan Cuatrienal.

125. Las fuentes de financiación para atender a estas necesidades provienen de las diversas entidades financieras, públicas y privadas que colaboran con el Plan con el siguiente reparto:

	<u>Ptas</u>
a) Banco Hipotecario de España	100 000 000 000
b) Caja Postal de Ahorros	20 000 000 000
c) Caja de Ahorros Confederadas	200 000 000 000
d) Banca Privada	30 000 000 000
v) <u>Promoción pública para demanda insolvente</u>	

126. El tercer elemento de la política de vivienda y derecho a la misma es el de la contribución a la satisfacción de la demanda insolvente menos capacitada económicamente a través de la promoción pública.

127. No obstante, corresponde al Estado el garantizar los fondos presupuestarios necesarios, y se considera adecuado el potenciar una serie de objetivos básicos, que serían los siguientes:

a) Que las viviendas de promoción pública se dirijan al segmento social, con ingresos inferiores a Ptas 800.000 brutas anuales (1,7 veces el salario mínimo interprofesional en 1984) constituido por las familias que carecen de capacidad adquisitiva real para acceder a la compra de viviendas de promoción privada;

/...

b) Que la oferta sea mayoritariamente en régimen de alquiler, con posibilidad de subvencionar los casos de necesidad, y que se mantengan los plazos y condiciones de financiación de 25 años y 5% de interés las viviendas en venta;

c) Que se apoyen los programas que tiendan a la reducción del coste de promoción, construcción, mantenimiento y conservación, como son la autoconstrucción por parte de los futuros propietarios; a la diversificación de las tipologías; a la mejora del medio urbano; a la incentivación de la rehabilitación; y a la participación de la promoción pública de los ayuntamientos y otros entes territoriales;

d) Apoyo a la promoción pública de iniciativa municipal mediante préstamos a las corporaciones locales.

vi) Rehabilitación y puesta en uso de las viviendas

128. El cuarto elemento de la política de vivienda y derecho a la misma es el de la contribución a la mejora de la utilización del parque existente mediante la rehabilitación y puesta en uso de viviendas desocupadas. En consecuencia, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 2329/83 de 28 de julio, sobre protección a la rehabilitación del patrimonio residencial urbano. Este Decreto, así como las Ordenes Ministeriales que lo han desarrollado, se han concebido para el desbloqueo de la situación, y habrán de ser complementados en función de las competencias autonómicas y locales.

129. La puesta en marcha de la política de rehabilitación y de puesta en uso de viviendas ha requerido adoptar un papel principalmente impulsor, incitando y apoyando los esfuerzos realizados por los entes territoriales. Una prueba de este papel ha sido la campaña de información y difusión que se ha desarrollado en los medios de comunicación acerca de las ventajas de rehabilitar edificios y de rescatar para ser habitadas viviendas antiguas, con lo que se consigue un doble objetivo: aumentar el número de viviendas disponibles y proteger nuestro patrimonio histórico y artístico.

vii) Apoyo a la diversificación de régimen de tenencia

130. Como quinto elemento de la política de vivienda se considera en apoyo a la diversificación de régimen de tenencia y la potenciación del arrendamiento: la potenciación del arrendamiento en nuestro país requiere la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en gran parte responsable del bloqueo actual de la situación, tanto en cuanto al deterioro de las viviendas de renta antigua como en cuanto al excesivo encarecimiento del escaso mercado existente. Ello es, asimismo, necesario para posibilitar la puesta en práctica de una amplia política de rehabilitación.

viii) Apoyo a la diversificación tipológica

131. En sexto lugar, el apoyo a la diversificación tipológica y al fomento de viviendas de baja altura. El cambio de una política cuantitativa de vivienda, a espaldas del usuario, a una política cualitativa, depende estrechamente del conocimiento detallado de necesidades diferenciales que sólo puede realizarse con efectos prácticos a nivel local, en estrecho contacto con los ciudadanos y los problemas urbanos.

/...

ix) Contribución a la mejora del medio ambiente urbano y rural

132. Elemento clave de la nueva política de vivienda es la contribución a la mejora del medio ambiente urbano y rural. El objetivo fundamental de este componente de la política de vivienda es la integración de una vivienda digna y adecuada dentro de un entorno igualmente digno para lo que es necesario:

a) El protagonismo municipal en el establecimiento de necesidades y en la programación de actuación de promoción pública en relación con el planteamiento y la programación urbanística, así como la integración de la política de vivienda en la política territorial de las comunidades autónomas;

b) El apoyo e impulso a las actuaciones de rehabilitación integrada del medio ambiente urbano y rural, ampliando los canales de financiación a los espacios comunes y a las dotaciones complementarias, y superando las diferencias de tratamiento entre el medio rural y el medio urbano;

c) El desarrollo legislativo para la obtención de suelo para la dotación y para posibilitar la agilización de la gestión urbanística y la mejora de los procedimientos de exigencia del cumplimiento de obligaciones y compromisos.

x) Fomento a la contención de costos y mejora de la calidad

133. La política de vivienda presta una especial atención al fomento a la contención de costos y mejora de la calidad. Un elemento fundamental de esta reducción de costos es una adecuada política de suelo ligada a las políticas urbanas municipales. Igualmente, el replanteamiento de la normativa existente de calidad dará lugar a un mayor realismo de su eficacia y de su influencia en la relación coste-calidad.

xi) Clarificación normativa y mejora del proceso productivo

134. El último elemento de la actual política de vivienda es la clarificación normativa y mejora del proceso productivo. La función principal de las administraciones públicas, en la regulación del proceso productivo de la edificación, es la de establecer un marco legal que determine el régimen de aplicación de los criterios de calidad y su reglamentación y facilitar los apoyos técnicos que sean precisos para su desarrollo y seguimiento.

135. En el estado autonómico esta regulación y el control de su cumplimiento se estructura en tres niveles básicos de concreción: el nivel municipal, el nivel autonómico y el nivel estatal garantizando, por una parte, la introducción de la diversidad necesaria para adaptarse a las distintas peculiaridades de cada localidad específica.

xii) Cuadro numérico de objetivos para un año tipo

136. Como objetivo cuantitativo el Plan Cuatrienal 1984-1987 pretende construir o rehabilitar 1 millón de viviendas con el siguiente programa tipo anual:

/...

	<u>Viviendas</u>
1. Viviendas de protección oficial de promoción pública ..	30 000
2. Viviendas de protección oficial de promoción privada	
Hasta 2,5 salario mínimo interprofesional	25 000
Restantes niveles de ingresos	95 000
TOTAL 2	<u>120 000</u>
TOTAL 1 + 2	150 000
3. Vivienda libre	<u>80 000</u>
TOTAL nuevas viviendas	230 000
4. Rehabilitación (modernización)	<u>20 000</u>
TOTAL (1+2+3+4)	250 000

c) Comparación entre el Plan Trienal (1981-1983) y el Plan Cuatrienal (1984-1987)

137. Si se compara el Plan Trienal con el Plan Cuatrienal, en cuanto a los niveles de esfuerzos económicos de los adquirientes, el resultado es el siguiente:

a) Para quienes perciben ingresos inferiores a 1,7 veces el salario mínimo interprofesional (menores a Ptas 800.000 en 1984) los esfuerzos en la primera anualidad son del orden del 15% en ambos planes;

b) Para los que ingresan entre 1,7 y 2,5 veces el salario mínimo interprofesional (menores a Ptas 800.000 y Ptas 1.178.000 en 1984) los esfuerzos se sitúan en un 26% en el Plan Cuatrienal, frente a un 39% en el Plan Trienal;

c) Para los que obtienen ingresos entre 2,5 y 3,5 veces el salario mínimo interprofesional (entre Ptas 1.178.000 y Ptas 1.650.000 en 1984), los esfuerzos se reducen al 20%, frente al 27% del Plan Trienal.

138. Estas condiciones suponen, para los esfuerzos de los adquirientes, en comparación con la situación anterior, una reducción de los mismos que puede llegar a alcanzar hasta un 50% en las condiciones más favorables. En general, mayor personalización en las ayudas, haciendo más progresivo el gasto público.

3. Medidas tomadas para proteger a los inquilinos, tales como control de alquileres y garantías legales

139. La vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, aun cuando establece un régimen de libertad de rentas para los nuevos arrendamientos y permite cláusulas contractuales de estabilización, mantiene el sistema de dos subrogaciones mortis causa y la cesión "inter vivos" lo que extiende la duración del contrato a tres

/...

generaciones de inquilinos, desnaturalizando un contrato que como el arrendamiento es personal y temporal, convirtiéndole en una figura muy parecida al vetusto censo enfitéutico.

140. Incluso la actualización contractual de rentas de los nuevos contratos tampoco ha jugado con normalidad en todos los casos, produciéndose desfases en las rentas debidos a los Decretos Leyes coyunturales de limitación de renta que por razones de política económica se han publicado anualmente hasta 1981, a la nulidad sobrevenida de muchas cláusulas contractuales y a la falta de cláusulas de estabilización de los arrendamientos de viviendas de protección oficial que por transcurso del tiempo de duración del régimen protector quedaban liberalizadas, pero sin posible actualización.

141. En cambio se ha producido el extremo contrario cuando por lo elevado de la renta inicial, la fuerte inflación experimentada por la cláusula estabilizadora desmesurada, se han producido elevaciones exageradas que ponen en graves dificultades a los arrendatarios. Al mismo tiempo la regulación del contrato de arrendamiento que hace la ley vigente, es anticuada y engorrosa, añadiendo complejidades innecesarias a la relación arrendaticia.

142. Todas estas circunstancias han dado lugar a que la estructura del mercado de alquileres en España esté distorsionada, en cuanto a la proporción que mantiene con respecto a las viviendas en propiedad y en comparación con los restantes países europeos.

143. Por otra parte, la falta de rentabilidad debida a la congelación de rentas, unida a la falta de cauces de financiación para realizar obras, el incremento de los gastos de conservación y aumento de presión fiscal, ha dado lugar a un incumplimiento de la obligación de conservar la vivienda que al propietario corresponde, en compensación de la renta que percibe.

144. Ello ha producido un evidente deterioro del parque inmobiliario, con la pérdida de riqueza que ello implica. Así se calcula que un 30% de las viviendas, más de 3 millones se encuentran en un estado deficiente de conservación, exigiendo obras importantes de rehabilitación para adquirir un estándar normal de habitabilidad.

a) Estructura del sector de alquiler

145. Por las razones antes expuestas, el sector de alquiler ha ido progresivamente disminuyendo. En 1950, el 52,8% de las viviendas se alquilaban y el resto se disfrutaban en régimen de propiedad. En 1980, el alquiler asciende según diversas encuestas a una cantidad que oscila entre el 22% y el 25% de las viviendas ocupadas.

146. En cualquier caso, esto no se da con uniformidad en todo el territorio nacional, puesto que mientras en las capitales de provincia y en las ciudades con una población superior a los 100.000 habitantes se obtienen aún fuertes porcentajes de viviendas en alquiler (36% y 23% respectivamente), en las zonas rurales la vivienda en alquiler sólo alcanza el 15% y, en general, se trata de viviendas con rentas antiguas. Pero incluso entre capitales de provincia hay diferencias apreciables, como lo demuestra el porcentaje de viviendas alquiladas en León, con un máximo del 27% frente al 9,5% correspondiente a Valladolid. La relación entre tenencia de vivienda y tamaño del hábitat, se expone a continuación:

/...

Tamaño de hábitat	Vivienda en propiedad	Vivienda en alquiler	Otros
Medida nacional	67	25	8
Capital de provincia	57	36	7
Ciudades no capital provincia con más de 100.000 habitantes	62	32	6
Ciudades entre 20.000 y 100.000 habitantes	68	24	8
Menos de 20.000 habitantes	76	15	9

147. En cuanto a la propiedad de las viviendas en alquiler, el mayor número de éstas pertenece a los particulares, siendo escaso el de las que está en manos de empresas inmobiliarias o de alquiler de otro tipo. Así, el 73% de los inquilinos, la tienen alquilada a un particular mientras que el 8,3% la tienen arrendada al sector público y el 3,6% a empresas inmobiliarias, lo que pone de manifiesto el carácter minifundista, disperso y la escasa participación institucional, tanto pública como privada.

b) La vivienda de protección oficial de promoción pública en alquiler

148. A partir de 1983, el Estado ha tratado de paliar el déficit de la vivienda en alquiler, promocionando y fomentando la construcción de viviendas de promoción pública para su cesión en régimen de arrendamiento, lo cual comporta, al mismo tiempo, un menor esfuerzo para los arrendatarios de estas viviendas, por cuanto la renta máxima anual de las mismas no puede superar en ningún caso el 3% del precio de venta y ésta se fija siempre en función del coste real de la construcción.

149. También cabe señalar que en las viviendas de promoción pública, se permite aplicar reducciones o bonificaciones de hasta un 50% de las rentas exigibles, cuya cuantía en su caso, se determina en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

c) Las nuevas medidas económicas

150. Por Real Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas de política económica, tratando de sentar las bases para un crecimiento estable de la economía española como condición necesaria para crear empleo.

151. Dentro de dichas medidas se incluyen aquellas que tratan de relanzar el sector de la construcción y con clara incidencia en el mercado de alquiler. Así, se autoriza la supresión de la prórroga forzosa en los contratos de

/...

arrendamiento de viviendas y locales de negocio que se concierten a partir de la entrada en vigor de dicho Decreto-Ley, con lo que se pretende aumentar la oferta de vivienda en alquiler, reduciendo al mismo tiempo la presión al alza de los alquileres, en beneficio principalmente de los futuros arrendatarios.

152. También dentro de dichas medidas adoptadas por el citado Real Decreto Ley, cabe destacar la de la posibilidad de desgravación en el impuesto de la renta de las personas físicas por la adquisición de viviendas de nueva construcción - cualquiera que sea su destino - así como por la rehabilitación de viviendas. Con anterioridad sólo existía la posibilidad de desgravar en los supuestos de adquisición de vivienda que fuera a constituir el domicilio habitual y permanente del contribuyente.

d) Régimen fiscal de las viviendas de protección oficial

i) Beneficios comunes a otros tipos de viviendas

153. La adquisición de viviendas para constituir en ella el domicilio habitual y permanente permite, como ya queda dicho, la desgravación en el impuesto de la renta de las personas físicas, prescindiendo de que la vivienda sea libre o protegida.

154. La medida adoptada a que se ha hecho mención en el epígrafe anterior incide y amplía esta desgravación, aplicable con carácter general a la adquisición y rehabilitación de viviendas.

ii) Beneficios específicos

155. La vivienda de protección oficial goza de determinados beneficios fiscales, tanto en período de construcción, como en la fase de adjudicación o venta.

156. Dada la finalidad de este documento, solamente citaremos los beneficios que inciden en los adquirentes de este grupo de viviendas. Así, principalmente la exención en el actual impuesto de transmisiones siempre que se trate de la primera venta de viviendas, así como por la constitución, división y extinción de los préstamos hipotecarios que graven dichas viviendas, la bonificación del 90% del arbitrio municipal de plusvalía o sobre incremento del valor de los terrenos, la bonificación de la base imponible de la contribución territorial urbana durante los tres primeros años contados desde la primera adquisición, y, finalmente, la minoración o reducción de honorarios en la escrituración e inscripción registral que se produzcan como consecuencia de la primera transmisión.

157. Finalmente, es de destacar que en el proyecto de ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se aplicará a partir de 1° de enero de 1986, se pretende que a las viviendas de protección oficial se aplique el tipo impositivo menor del 6%, frente al 12% de las viviendas no acogidas o libres.

/...

III. ARTICULO 12. DERECHO A LA SALUD FISICA Y MENTAL

Principales leyes, reglamentos administrativos, acuerdos colectivos y otros tipos de medidas destinados a defender y promover el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y decisiones de los tribunales pertinentes

158. La política sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo tiene como objetivo la creación de un sistema nacional de la salud integrado que extienda a todos los ciudadanos la atención a la misma. Tal política se orienta a fomentar la promoción de la salud, la medicina preventiva a nivel individual y colectivo, la atención primaria, la asistencia eficiente y la reinserción social del paciente.

159. Con la aprobación del anteproyecto de la Ley de Sanidad, actualmente en tramitación en el Parlamento, culminará un largo proceso de perfeccionamiento progresivo y constante de la asistencia sanitaria en nuestro país. La multiplicidad de las normas aprobadas, desde el primer informe de España sobre los mismos artículos del Pacto que el presente, han aconsejado adjuntar un índice cronológico por materias de las mismas, así como los textos de las que se han considerado más importantes (véase anexo III).

160. Por Real Decreto 1377/84, de 4 de julio, se extiende la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a los descendientes, hijos adoptivos y hermanos de titulares del derecho, hasta que aquellos cumplan 26 años de edad. Con esta ampliación se asegura la asistencia sanitaria a jóvenes menores de 26 años que, por haber conseguido un puesto de trabajo, no tengan, por sí mismos, el derecho a esta asistencia.

161. Dentro del área de protección a la infancia, es de destacar la Orden de 28 de marzo de 1984 sobre cobertura asistencial por los equipos obstétricos desde el primer trimestre de gestación y la Orden de 11 de julio de 1984 por la que se regula la información epidemiológica sobre vacunación antihepatitis B, estableciendo criterios restringidos en su distribución y utilización.

162. El programa de vacunaciones sistemáticas que el Ministerio viene realizando desde hace años ha intensificado una acción reforzada de inmunización, mediante la vacuna triple vírica que pretende, a más largo plazo, la eliminación del sarampión, la rubeola y la parotiditis. Esta campaña se ha llevado a cabo con el concurso de una unidad de vigilancia y desarrollo del programa de vacunación y de todas las acciones de inmunización emprendida, en colaboración con las comunidades autónomas.

163. Desde 1981, se ha continuado el programa de vacunaciones contra la difteria, el tétanos, la tosferina y la poliomielitis, según el Calendario Nacional de Vacunación. El citado año se inició la vacunación con vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) que, año tras año ha ido aumentando en cuanto al número de dosis aplicadas. La introducción de esta vacuna ha supuesto una modificación del calendario de vacunación en el sentido siguiente:

/...

- a) Introducción de una nueva inmunización antiparotiditis;
- b) Vacunación antisarampionosa a partir de los 15 meses de edad, precisamente con vacuna triple vírica, dejando la vacuna antisarampión monovalente para aquellos niños en que, por situación especial de riesgo, sea aconsejable una primera dosis de vacuna a los nueve meses;
- c) Vacunación antirubeola a los 15 meses, sin abandonar la práctica de la vacunación monovalente en niñas de 11 años.

164. Respecto a la lucha contra la hepatitis, ha supuesto un avance importante la accesibilidad a la vacunación antihepatitis B 18/. Durante 1983 se formó, en el Ministerio de Sanidad y Consumo, un grupo de trabajo para estudiar la regulación de la dispensación de vacuna antihepatitis B. Ello dio lugar a la promulgación de un Real Decreto por el que se regula el suministro, distribución, prescripción y control de la administración de la vacuna antihepatitis B que contempla los grupos sociales de riesgo, pruebas serológicas a practicar, documentación a cumplimentar y autoridades sanitarias competentes. Poco después se publicó una Orden Ministerial que regula la información epidemiológica sobre vacunación antihepatitis B 19/.

165. A lo largo de 1982-1983, se puso el esfuerzo específico en el área perinatal para obtener datos en relación con la morbilidad neurológica y la mortalidad neonatal. Se completó la campaña iniciada en 1981 para conocer la situación del utillaje de los distintos servicios de asistencia materno-infantil de nivel terciario, tanto en lo referente a obstetricia como neonatología, con el fin de completar su dotación. Gracias a esta mejoría en el aparataje, puede explicarse la disminución de mortalidad perinatal registrada en muchas instituciones, cuya tasa se rebajó a cifras de 11 e incluso 9%.

166. La detección precoz de errores congénitos del metabolismo se ha dirigido al diagnóstico de posibles casos de fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito en la población de recién nacidos en España.

167. Particular atención se ha dedicado a la sanidad escolar, en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia, especialmente en lo que se refiere a las condiciones sanitarias, pedagógicas y sociales que deben reunir las guarderías infantiles y los centros preescolares. Asimismo se ha reforzado la vigilancia y control de las condiciones de los vehículos utilizados para el transporte escolar.

168. La política sanitaria en favor de la infancia se ha reflejado en el descenso de la mortalidad infantil, relativamente elevada hasta 1974 (18,5 sobre 1.000 nacidos vivos, en dicho año) que ha disminuido algo menos de la mitad en el

18/ Real Decreto 31-79/1983 de 23 de noviembre, por el que se regula el suministro, la distribución, prescripción y control de la administración de la vacuna contra la hepatitis B (Boletín de 28 de diciembre de 1983).

19/ Orden de 11 de julio de 1984 por la que se regula la información epidemiológica sobre vacunación antihepatitis B (Boletín de 20 de julio de 1984).

/...

último decenio: la tasa estimada para 1982 a partir de cifras provisionales alcanza un valor de 9,6 fallecidos menores de un año sobre 1.000 nacidos vivos (véase cuadro 2).

169. En lo que se refiere a la asistencia de medicina primaria, el Real Decreto 2392/1982, de 3 de septiembre, creó las unidades piloto de medicina de familia, desarrollado por Orden de 22 de octubre de 1982, normativa que se completa por la Orden de 19 de diciembre de 1983 que regula el desarrollo de la formación en atención primaria de salud de la especialidad de medicina de familia y comunitaria.

170. Con posterioridad, el Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud, en su disposición transitoria sexta establece que las unidades piloto de medicina de familia serán transformadas en equipos de atención primaria.

171. Este Real Decreto es fundamental para entender la reforma de la atención primaria que ya se está llevando a cabo en España adelantándose a la propia Ley General de Sanidad, siguiendo no obstante las directrices que han servido de base para la elaboración del proyecto de la citada ley. En este sentido hay que decir que tras el desarrollo del Decreto por varias Ordenes Ministeriales, se crearon, durante 1984 por el Instituto Nacional de la Salud, 201 centros de salud con sus equipos de atención primaria de acuerdo con el mencionado Real Decreto 137/1984. Estos centros de salud suponen una mejora sustancial del dispositivo que existía para la atención primaria. En el actual año 1985, se ha continuado su creación e implantación que irá extendiéndose progresivamente por todo el país. Paralelamente, se han adoptado una serie de medidas coordinadas para la mejora de la atención primaria, entre ellas cabe destacar:

- a) El establecimiento de cartilla para enfermos con tratamientos prolongados, evitando los desplazamientos repetidos de éstos para la recogida de recetas;
- b) Instauración de unidades periféricas de extracción de sangre y recogida de muestras;
- c) Iniciación del sistema de citación previa en consultas;
- d) Plan de humanización de la asistencia primaria;
- e) Nuevo modelo de receta médica.

172. En el campo de la planificación sanitaria, que se pretende en el Proyecto de Ley General de Sanidad, van a seguir ocupando un lugar preferente las unidades de atención primaria que tendrán como soporte la creación de unidades funcionales que serán de nueva creación en el medio urbano y de adecuación en el medio rural, responsabilizándose de la atención de la salud, en un primer escalón, dentro de un área geográfica determinada. Dicha atención de salud será a la vez integral e integrada; es decir, asumirá tanto las funciones asistenciales como las de promoción y prevención de salud y se interrelacionará con los diferentes escalones del sistema, tendiendo a la unificación funcional de los recursos sanitarios y no sanitarios del área.

/...

173. Respecto a la orientación familiar, que ha surgido en nuestro país como respuesta a la demanda social de la población, fueron grupos de mujeres los primeros en responder a una necesidad de toda la población española, reivindicada muy especialmente por las mujeres, como derecho de la persona a controlar su capacidad reproductora, permitiendo, además, separar la sexualidad femenina de la maternidad. La contracepción constituye un factor que puede contribuir a transformar el papel de la mujer en la sociedad convirtiendo la maternidad en un acto voluntario y en una opción personal, permitiendo, por otra parte, evitar los embarazos que representen un riesgo para la salud de las futuras madres.

174. En nuestro país, no se ha extendido de forma generalizada la utilización de los conceptivos hasta el año 1978, en que fue aprobada la Ley 45/1978, de 7 de octubre, que modifica los artículos 343 bis y 416 del Código Penal, despenalizando su uso, que se completa con el Decreto 3033/1978, de 15 de diciembre, del entonces Ministerio de Sanidad y Seguridad Social sobre su expedición y publicidad.

175. En junio de 1983, en el que fue aprobada la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, sobre reforma urgente y parcial del Código Penal, tuvo lugar la despenalización de la anticoncepción permanente.

176. En España se da la paradoja de que, en los últimos 10 años, ha habido un brusco descenso de la natalidad (19,21 por 1.000 habitantes en 1973, 13,44 en 1982, y 12,50 en 1984), a pesar del aumento del número de mujeres en edad de procrear. Para evaluar la magnitud de la caída de la natalidad es de señalar que en 1983, según datos provisionales de movimiento natural de la población, el número de nacimientos se sitúa por debajo de 500.000 y las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística sitúan dicha cifra en torno a los 480.000 para el pasado año 1984. Cinco años antes, es decir en 1979, el número de nacimientos era superior a 600.000.

177. La disminución de la fecundidad ha sido todavía más pronunciada, ya que el crecimiento efectivo en mujeres de edad de procrear empuja hacia una evolución también creciente de la natalidad, desde la mitad de los años 70. Así en 1974, el número medio de hijos por mujer era de 2,88; la caída bruta de la fecundidad aún no interrumpida se inició en 1977 (2,66 hijos por mujer) alcanzando el nivel de reemplazamiento de las generaciones (2,1 hijos por mujer) a finales de 1980 (véase cuadro 1).

178. El valor proyectado para 1980 (1,7 hijos por mujer) implica que el indicador transversal de fecundidad se ha reducido en más de un hijo por mujer durante los últimos ocho años; en términos relativos al nivel de fecundidad ha disminuido en un 40% en el mismo período. Más aún, la caída no parece haber "tocado fondo" todavía, es probable que se prolongue hasta alcanzar un nivel máximo próximo al 1,5 hijos por mujer, en la segunda mitad de la presente década.

179. Respecto al número de centros de orientación y planificación familiar, en 1977 se inició un proceso desordenado de creación en el que además de grupos de mujeres feministas intervinieron asociaciones ciudadanas, partidos políticos y ayuntamientos. En 1978, los Ministerios de Sanidad y Cultura pusieron en marcha 19 centros de distintas zonas del país. En 1983, el Ministerio de Sanidad elaboró el plan de centros de orientación familiar, en el que se definen los criterios de

/...

funcionamiento, el equipo y las prestaciones que deben ofrecerse 20/. Durante 1984 el Instituto Nacional de la Salud abrió 34 centros más. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al último trimestre de 1984, existían 193 centros de los que el 88,09% eran públicos y de ellos el 55,54% municipales. La distribución de estos centros era irregular y en la fecha indicada sólo cubrían el 5,6% de la población de mujeres en edad fértil.

180. Esta manifiesta insuficiencia dio lugar a la aprobación del "Plan General de Centros de Orientación Familiar" del Ministerio de Sanidad y Consumo para ampliar la cobertura existente e incluir los servicios de orientación familiar en la red de atención primaria del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). Durante el año 1984, el Instituto Nacional de la Salud puso en marcha 33 nuevos centros de orientación familiar estratégicamente distribuidos.

181. En el campo de la medicina especializada extrahospitalaria y hospitalaria, es de subrayar que en nuestro país, al igual que en otros sectores de la sanidad, también con anticipación a la entrada en vigor de lo que será la norma básica de la sanidad, es decir, la Ley General de Sanidad, se han producido una serie muy importante de normas de inferior rango que suponen una auténtica y profunda reforma de la medicina especializada, en todos aquellos aspectos que no precisaban una norma con rango de ley para dicha reforma. Entre las medidas adoptadas en este campo se podrían destacar:

- a) Implantación de un nuevo modelo de gestión hospitalaria;
- b) Progresiva jerarquización de los especialistas de instituciones abiertas, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 25 de abril de 1984, que supone un aumento de dedicación, horario y coordinación e integración en un servicio de un hospital del área;
- c) Nuevo régimen de jornada laboral del personal facultativo de los servicios jerarquizados en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, que permitirá el más adecuado aprovechamiento de los medios personales y materiales de los centros hospitalarios;
- d) Modificación de los órganos de dirección de los hospitales y la dotación de su personal y regulación de la provisión de los cargos y puestos correspondientes;
- e) Aprobación del reglamento general de estructura, organización y funcionamiento de los hospitales de la Seguridad Social;
- f) Aprobación de medidas en orden a la constitución de una red pública de hospitales mucho más unificada y operativa;
- g) Iniciación de un proceso de racionalización de la distribución territorial de las camas hospitalarias, de acuerdo con las necesidades de la población;

20/ Desde el sector público.

/...

h) Iniciación de un proceso de adecuación de las plantillas del insalud en orden al mejor aprovechamiento de los recursos de personal;

i) Implantación de un plan progresivo de humanización de los hospitales del insalud y elaboración e implantación de la carta de derechos y deberes del paciente, que habrá de recogerse en la Ley General de Sanidad para su vigencia formal, de acuerdo con la Constitución española;

j) Iniciación del sistema de citación previa en consultas de especialidades, siempre que ello es posible;

k) Implantación de un plan nacional de desplazamiento de especialistas, para evitar desplazamientos de los enfermos y contribuir a la desmasificación de consultas.

/...

Anexo I

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS Y A LAS OBSERVACIONES
HECHAS EN EL GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES DEL
PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DURANTE
EL EXAMEN DEL INFORME INICIAL

/...

Respuestas a las preguntas formuladas y a las observaciones hechas en el Grupo de Trabajo de expertos gubernamentales del período de sesiones del Consejo Económico y Social durante el examen del informe inicial

1. En la séptima sesión del Grupo de Trabajo, en el período de sesiones de abril de 1982, en la que tuvo lugar la presentación del Informe español sobre los artículos 10 a 12 del Pacto, se formularon varias preguntas, por los representantes de la República Federal de Alemania, Bulgaria, Francia, Jamahiriya Árabe Libia, Japón, República Socialista Soviética de Bielorrusia y Unión de Repúblicas socialistas Soviéticas, sobre las últimas reformas del Código Penal, los sistemas de jubilación anticipada, el deber de prestación de alimentos de los hijos hacia los padres, la protección de la mujer durante el embarazo y resultados de la política de vivienda, preguntas que no fueron contestadas en su totalidad, por lo que se facilita información complementaria.

2. El Código Penal, cuyo texto refundido se ha aprobado por Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre, ha sido objeto de importantes modificaciones a partir de la promulgación de la Constitución española de 1978: la Ley 22/1978, de 26 de mayo, sobre despenalización del adulterio y del amancebamiento; la Ley 46/1978, de 7 de octubre, que deroga diversos artículos del Código Penal, particularmente los relacionados con los "delitos contra la honestidad" que reciben un tratamiento mucho más moderno y pasan a considerarse como delitos contra la libertad de las personas; la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de reforma urgente y parcial del Código Penal, en la que, entre otras novedades, se introduce una muy importante, respecto de la violación, en la que el perdón del ofendido, en ningún caso, extingue la acción penal; y otra por la que se considera delictiva la conducta de los funcionarios públicos que denieguen una prestación en razón, entre otras causas, de discriminación por razón de sexo. Finalmente, la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis, despenaliza el aborto practicado por un médico o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre; que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado; o que se presuma que el feto haya de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien, o bajo su dirección, se practique el aborto.

3. Respecto a la jubilación anticipada, en el texto refundido de la Ley del Régimen General de la Seguridad Social, se fija la edad mínima de jubilación en 65 años, no estableciéndose ninguna diferencia por razón de sexo (art. 154 a)). No obstante, existe la posibilidad de una jubilación anticipada, reuniendo determinados requisitos, con coeficientes reductores, en función de los años en que se anticipe dicha jubilación (entre 60 y 65 años).

/...

4. En el apartado 2 del artículo 154 a), se contempla la posibilidad de rebajar el límite de edad de la jubilación en aquellas actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Así ocurre en la minería en general y en los regímenes especiales de la minería del carbón, trabajadores del mar, ferroviarios, etc.

5. Dentro de las medidas del fomento del empleo, previstas en el ANE de 9 de julio de 1981, figuraba el establecimiento de un sistema especial de jubilaciones pactadas en convenios colectivos o mediante acuerdos entre empresas y trabajadores, que permitiera la jubilación con el 100% de los derechos pasivos de los trabajadores, al cumplir 64 años de edad y simultánea contratación por parte de las empresas de trabajadores jóvenes o perceptores del seguro de desempleo, en número igual al de las jubilaciones anticipadas pactadas. Esta modalidad constituye una jubilación a todos los efectos con cargo integramente a la Seguridad Social.

6. Con el fin de obtener los máximos resultados de este sistema de fomento del empleo, se ha llevado a cabo su revisión mediante el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, por el que se acomoda, al amparo de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, modificada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto, las normas sobre anticipación de la edad de jubilación como medida de fomento del empleo.

7. En la actualidad los contratos que se celebren para sustituir a los trabajadores que se jubilen podrán concertarse al amparo de cualquiera de las modalidades de contratación vigentes excepto la de contratación a tiempo parcial y la modalidad prevista en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, cuya finalidad es hacer frente a circunstancias del mercado, acumulación de tareas, exceso de pedidos, etc.; y con todos los colectivos de trabajadores, siempre que estos últimos se hayan inscrito, como desempleados, en la correspondiente Oficina de Empleo.

8. La Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización y el Real Decreto 1990/1984, de 17 de octubre, sobre desarrollo de las medidas laborales de la reconversión industrial establecen ayudas equivalentes a la jubilación del sistema de la Seguridad Social, para los trabajadores que, con 60 o más años y como consecuencia de la reconversión, cesen en sus empresas antes de alcanzar la edad fijada para la jubilación reglamentaria en el Régimen de la Seguridad social en que estén encuadrados.

9. Las empresas que se encuentren en situación de crisis o reconversión tecnológica, aunque no estén incluidas en planes de reconversión, también pueden beneficiarse de un sistema análogo al anterior que consiste en ayudas equivalentes a la cuantía de las pensiones de jubilación que pudiera reconocérseles a los trabajadores entre 60 y 65 años de edad, en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social, hasta que cumplan los 65 años, fecha en la que pasan a disfrutar de una jubilación reglamentaria.

/...

10. En ambos supuestos, no se trata de una jubilación anticipada, propiamente dicha, sino de ayudas equivalentes a las cuantías de las pensiones de jubilación que hubieran correspondido a los trabajadores en el Régimen de la Seguridad Social en que estuvieran encuadrados; y su financiación es mixta, compuesta de aportaciones de las empresas acogidas que las soliciten de fondos públicos, con cargo a la sección correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado. Su gestión se realiza a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

11. En lo que se refiere a la obligatoriedad de prestación de alimentos entre parientes, el artículo 143 del Código Civil, modificado por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, la establece entre, primero, los cónyuges y segundo, los ascendientes y descendientes.

12. De acuerdo con el artículo 176, corresponden al hijo adoptivo los mismos derechos y obligaciones que a los hijos por naturaleza. Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios, para la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación.

13. De acuerdo con el artículo 142, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.

14. En cuanto a la protección de la mujer durante el embarazo, en el apartado 8 del artículo 10 del informe, se trata ampliamente este punto, de forma global. Desde el punto de vista sanitario, la mujer trabajadora tiene derecho en caso de maternidad a la asistencia sanitaria completa (período prenatal, asistencia al parto y período postnatal), totalmente gratuita, con cargo a la Seguridad Social. Estos mismos beneficios se otorgan a las esposas de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, así como a las trabajadoras extranjeras, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que estén al servicio de empresas comprendidas en dicho Régimen.

15. Finalmente, en lo que se refiere a los resultados de la política de vivienda, como se refleja en el capítulo correspondiente del informe, la valoración del Plan Cuatrienal 1984-1987 es altamente positiva, ya que durante el primer semestre del año 1985 se han alcanzado los objetivos fijados en el mismo casi en su totalidad, tanto en la promoción de las viviendas como en la rehabilitación de las mismas.

16. Los recursos disponibles del plan se elevan a 340.000 millones de pesetas de los que pueden beneficiarse los adquirentes y promotores de viviendas de protección oficial. Esto ha sido posible gracias a la asignación de 14.000 millones de pesetas procedentes de los fondos del acuerdo económico y social.

17. Entre las ayudas recientemente concedidas destacan las destinadas a favorecer la adquisición de viviendas a trabajadores con ingresos inferiores a 1.200.000 millones de pesetas anuales. Dichas ayudas consisten en entregas de 400.000 millones de pesetas por beneficiario a fondo perdido, y de préstamos muy ventajosos, en plazos e intereses de amortización, para financiar el precio restante.

/...

Anexo II

LISTA DE MATERIALES DE REFERENCIA a/

I. DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

- a) Ley 11/1981, de 13 de mayo (Jefatura del Estado). Código Civil. Lo modifica en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio (Boletín de 19 de mayo de 1981).
- b) Ley 30/1981, de 7 de julio (Jefatura del Estado). Código Civil. Modifica la regulación del matrimonio y determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio (Boletín de 20 de julio de 1981).
- c) Ley 51/1982, de 13 de julio (Jefatura del Estado). Código Civil. Modifica artículos 17 a 26: nacionalidad (Boletín de 30 de julio de 1982).
- d) Ley 13/1983, de 24 de octubre (Jefatura del Estado). Código Civil. Lo modifica en materia de tutela (Boletín de 26 de octubre de 1983).
- e) Instrumento de Adhesión de 27 de enero de 1984 de España al Convenio No. 6 de la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC) relativo a la determinación de la filiación materna de hijos no matrimoniales, hecho en Bruselas el 12 de septiembre de 1982 (Boletín de 17 de abril de 1984).

II. LEGISLACION EN MATERIA DE VIVIENDA

- a) Real Decreto 2455/1980, de 7 de noviembre, sobre Financiación y Seguimiento del Plan 1981-1983 de Construcción de Viviendas de Protección Oficial (Boletín de 13 de noviembre de 1980).
- b) Real Decreto 1609/1981, de 5 de junio, por el que se amplía la financiación de Viviendas de Protección Oficial a Viviendas Libres con una superficie útil no superior a 105 m² (Boletín de 31 de julio de 1981).
- c) Real Decreto 375/1982, de 12 de febrero, sobre rehabilitación de viviendas (Boletín de 3 de marzo de 1982).
- d) Real Decreto 372/1982, de 12 de febrero, por el que se amplía la subsidiación de intereses a determinadas viviendas de protección oficial del Plan Trienal (Boletín de 3 de marzo de 1982).
- e) Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos (especialmente supresión de barreras arquitectónicas en viviendas y edificaciones) (Boletín de 30 de abril de 1982).

a/ Estos materiales de referencia pueden consultarse en los archivos del Centro de Derechos Humanos de la Secretaría en su idioma original como se recibieron de España.

/...

- f) Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, sobre Protección a la Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano (Boletín de 7 de septiembre de 1983).
- g) Real Decreto 2342/1983, de 23 de julio, por el que se modifica el precio de venta de las viviendas de protección oficial de promoción pública (Boletín de 9 de septiembre de 1983).
- h) Real Decreto 3280/1983, de 14 de diciembre (Plan Cuatrienal 1984-1987) sobre Financiación de Actuaciones Protegibles en Materia de vivienda (Boletín de 5 de enero de 1984).

III. DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Indice cronológico de disposiciones aprobadas.

- a) Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud.
- b) Orden de 15 de noviembre de 1984 por la que se autoriza un sistema de desplazamientos para la asistencia sanitaria especializada en la Seguridad Social.
- c) Orden de 28 de febrero de 1985 por la que se establecen los órganos de dirección de los hospitales y la dotación de su personal, regulando la provisión de los cargos y puesto correspondiente.
- d) Orden de 1° de marzo de 1985 por la que se aprueba el Reglamento General de Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales de la Seguridad Social.
- e) Orden de 28 de marzo de 1984 sobre cobertura asistencial por los equipos obstétricos desde el primer trimestre de gestación.
- f) Ley 26/1984, de 19 de julio, para la defensa de los consumidores y usuarios.
- g) Real Decreto 842/1985, de 25 de mayo, por el que se desarrolla lo dispuesto en el capítulo IX del Código Alimentario Español, sobre las condiciones generales que, para uso doméstico y de la población infantil, deben reunir los disolventes, colas, pegamentos, pinturas, tintas, barnices y otros materiales análogos.
- h) Real Decreto 3179/1983, de 23 de noviembre, por el que se regula el suministro, la distribución, prescripción y control de la administración de la vacuna contra la hepatitis B (Boletín de 20 de diciembre de 1983).
- i) Orden de 11 de julio de 1984 por la que se regula la información epidemiológica sobre la vacunación antihepatitis B (Boletín de 20 de julio de 1984).
